

La Ciudad Futura

Revista de Cultura Socialista

Director Fundador: José Aricó (1931-1991). Directores: Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula - ISSN 0328-221X - N°52, Buenos Aires, Invierno 2002 \$5

Ensayo

Reflexiones sobre el concepto de multitud

Paolo Virno

Andrew Arato

Los tribunales militares de Bush y el fantasma de la dictadura

Libros

Laó-Montes y Dávila

Antoinette Hartel

Hugo Vezzetti

Pepe Eliashev

Joseph Stiglitz

Pablo Bustos

Novaro, Sebares, Botana

Fabían Bosser

La crisis argentina y las deudas del progresismo

Eduardo Hecker

No hay sociedad sin moneda

Hugo Quiroga

Paradojas de la crisis

Lula mandando en Pérez Companc

Sebastián Etchemendy



La reforma política en el pantano

Edgardo Mocca

Gobernabilidad y corrupción

Hernán Charosky

El contrato ya está roto

Lucrecia Teixidó

El capitalismo real

Sergio Bufano

Dolarización: un programa político

Ricardo Mazzorin

El socialismo: una casa siempre abierta y en permanente construcción

Jorge Tula

En este número

Si bien el volumen no reconoce de manera expresa un hilo conductor, el conjunto de las contribuciones del *staff* se relaciona con el actual proceso de crisis y decadencia que estamos viviendo en el país. En ese cuadro, dentro de la sección Política merecen destacarse las intervenciones de Eduardo Hecker y de Hugo Quiroga, invitados especiales del número, que aportan lúcidos y originales enfoques; el primero, colocando de un modo innovador el problema del desempleo, y el segundo, abordando el papel de la moneda en la dimensión constitutiva de la sociedad. Asimismo resaltamos la colaboración en Libros de otro amigo de *La Ciudad Futura*, Pablo Bustos, quien analiza el pensamiento de Joseph Stiglitz en el polémico marco que brinda el contexto argentino y mundial. Un artículo igualmente valioso es



Antropofagia (1929)

el de Andrew Arato, acerca del debilitamiento de los valores republicanos y democráticos que se registra en los EEUU bajo el gobierno de George W. Bush, en particular luego de los atentados del 11 de septiembre del año pasado.

Este trabajo trae una significación agregada, ya que se trata de un anticipo del material que presentará la neoyorquina *Constellations* en su edición de noviembre próximo. El ensayo presenta dos textos inéditos en español del italiano Paolo Virno, con agudas reflexiones sobre el concepto de multitud. Por su parte, Antoinette Hartel, al comentar una compilación de textos sobre el proceso de latinización de la ciudad de Nueva York, incorpora el análisis de un fenómeno político-cultural de época, relativamente poco estudiado en estas latitudes. *OP*

Sumario

Política

- Edgardo Mocca:** La reforma política en el pantano 3
Eduardo Hecker: La crisis argentina y las deudas del progresismo 5
Hernán Charovsky: Gobernabilidad y corrupción 8
Hugo Quiroga: No hay sociedad sin moneda 11
Ricardo Mazzorin: Dolarización: un programa político 14
Lucrecia Teixidó: El contrato ya está roto 16
Sergio Bufano: El capitalismo real 18
Jorge Tula: El socialismo: una casa siempre abierta y en permanente construcción 20

Internacional

- Andrew Arato:** Los tribunales militares de Bush y el fantasma de la dictadura 25

La artista: Tarsila do Amaral nació en Capirivá, estado de San Pablo, Brasil, en 1886 y murió en San Pablo en 1973. El gran sentido de su obra fue testimoniar de manera audaz el orgullo de ser brasileña. Iniciada en el cubismo, se alineó luego en el modernismo y con la célebre *Abaporí* (1928) fue adalid del Movimiento Antropofágico, creado por Oswald de Andrade. En los años 30 pasó a la figuración realista, con menor preocupación por el desarrollo formal, al ritmo de sus nuevas preocupaciones políticas y sociales, giro especialmente visible en *Obreros*, de 1933.

Libros

- Antoinette Hartel:** Nueva York: un experimento panlatino 29
Pepe Eliachev: ¿Por qué ahora? Porque las uvas están maduras 31
Fabían Bosoer: El país de los últimos días 33
Pablo Bustos: De te fabula narratur 35
Ensayo
Paolo Virno: Reflexiones sobre el concepto de multitud 38

Contratapa

- Sebastián Etchemendy:** Lula mandando en Pérez Compané

Marín Plot, Ernesto Semán, Pablo Semán, Lucrecia Teixidó, Comité asesores: Emilio De Ipola, Jorge Kors, Carlos Kreimer, Ricardo Nudelman, Oscar Terán. **Maqueta original:** Juan Pablo Renzi. **Administración:** Amílido Jáuregui. **Diagramación y armado:** Viviana Mozzi. **Corrección:** Violeta Collado y Carlos Astorrelli. **Impresión:** Gráfica Integral. **José Bonifacio** 257, (1424) Buenos Aires. **Distribución:** Siglo XXI Argentina, Lavalle 1634, 11° A, (1048) Buenos Aires. **Registro de la Propiedad Intelectual:** N°192675. **Suscripción anual:** Argentina, \$20. Exterior, USS 30. **Cheques y giros:** a la orden de Osvaldo Pedrosa.

La Ciudad Futura

Marcelo 1785, 6° piso, (1093) Buenos Aires, teléfonos 4372-3663 y 4805-0826, e-mail: opedrosa@ciudad.com.ar.

Director fundador: José Arico (1931-1991). **Directores:** Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula. **Editor:** Osvaldo Pedrosa. **Consejo de redacción:** Gerardo Aboy Carles, Gerardo Adrogé, Alejandro Bonvecchi, Fabián Bosoer, Sergio Bufano, Franco Castiglioni, Horacio Crespo, Hernán Charovsky, Sebastián Etchemendy, Javier Franzé, Marcelo Leiras, Ricardo Mazzorin, Edgardo Mocca, Guillermo Ortiz, Vicente Palermo,

EMPLAZAR SIN VALOR COMERCIAL
PROHIBIDA SU VENTA

Política

Elecciones en un deplorable contexto institucional

La reforma política en el pantano

“Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”. Así lo establece el artículo 38 de la Constitución Nacional después de su reforma en 1994. Paradójicamente, los partidos alcanzan estatuto constitucional en el momento en que su época de oro puede ser considerada como parte del pasado histórico.

Edgardo Mocca

Ocho años después de la reforma, los partidos políticos se encuentran en el centro de los cuestionamientos ciudadanos. El nivel de confianza en los partidos alcanzaba hasta cinco por ciento en febrero de 2002, según una encuesta del PNUD: eran, así, las instituciones menos confiables para la gente. El repertorio de esta descalificación ciudadana es vasto y diverso: se les reprocha la conformación de una casta privilegiada de la sociedad, la práctica sistemática de la corrupción, la ignorancia de la realidad en la que viven, la carencia de sentido del bien común, la impericia para el cumplimiento de sus funciones... Esta sentencia tan aplastante como masiva no impedía que hasta hace poco (octubre del año pasado, siempre según el PNUD), sesenta por ciento de los argentinos consideraran que “sin partidos no puede haber democracia”; en febrero de este año la proporción que sostenía su acuerdo con esa afirmación había descendido a cuarenta y siete por ciento.

Con alegría, temor o resignación, según los casos, se fue generando entre los observadores políticos, a partir de la crisis que estalló en diciembre último, la sensación de que el sistema de partidos argentino había entrado en un irreversible colapso. La “reforma política” había dejado de ser una controversia académica para convertirse en el santo y seña de una cruzada nacional para la renovación de la dirigencia política, cuestión erigida por algunos en la panacea de la recuperación nacional. No puede hablarse de un desenlace en esta saga pero parece

que el ardor reformista –regeneracionista en el caso de algunos actores de este drama– parece haberse enfriado considerablemente. La fijación de un calendario electoral, aunque precario y envuelto en legítimos cuestionamientos constitucionales y legales, parece haber cambiado el eje del debate: en el lugar que presuntamente iba a ocupar la forma de abrigar paso a una nueva generación de dirigentes políticos, asistimos a una lucha cotidiana y nada cristalina por el poder entre personajes de la política de los que podrá decirse cualquier cosa menos que son nuevos. Hace tres meses, el “que se vayan todos” constituía un nuevo punto de partida (una vez más!) para la política argentina; había que hacer elecciones inmediatas de cualquier manera y con cualquier sistema, no importa cuán refutado con la letra constitucional pudiera estar. Hoy, la discusión es pragmática y puntual: cada uno de los candidatos a la presidencia procura incidir en la letra chica de los decretos de convocatoria de acuerdo con sus convicciones. La reforma política se limita a una ley que establece un régimen de financiamiento de los partidos políticos de corte más avanzado que el anterior, pero cuyo control quedaría en manos de autoridades designadas por los propios partidos; y a convocar a elecciones internas abiertas, cuyo modo de desarrollo no había terminado de definirse al momento de escribirse este comentario.

¿Hay que lamentarse por este “pantano” del reformismo institucional? En primer lugar, conviene decir que el balance es provisorio e inestable. Corresponde a un período de estabilidad relativa de la crisis nacional, a una suerte de

“equilibrio en el fondo del pozo” a que han dado lugar cierto freno de la caída económica, algunos índices fragmentarios y escuálidos de recuperación (por ejemplo, en la recaudación de impuestos), y la voluntad de colaboración expresada por el Secretario del Tesoro de EEUU. Cualquier novedad política que pudiere abrirse en los múltiples campos de conflicto nacional e internacional que atraviesan el país podría modificar los términos de la cuestión y reabrir en sus aspectos más radicales. Aquellos actores políticos que vean en peligro sus chances tendrán múltiples resortes para activar con el propósito de “embarrar la cancha”. Pero el balance provisorio indica que habrá algunos reagruponamientos, algunos liderazgos emergentes y acaso la declinación de alguna fuerza tradicional, pero no cambios drásticos en las reglas de juego institucionales ni un brusco cambio de paisaje político.

Las cuestiones que llaman al lamento no son pocas. Si todo sigue en la dirección actual, los argentinos vamos a elegir un nuevo presidente de la república en un deplorable contexto institucional. Tenemos un nivel de fragmentación y desagregación política que registra pocos antecedentes en la historia política comparada. Hablando en los términos en los que lo hacía Sartori hace tres décadas, tenemos polarización ideológica, sobrefores electoral, oposiciones desleales, vaciamiento del centro; es decir, todas las condiciones para la inviabilidad de la democracia liberal. Vamos a elegir un presidente que probablemente –no importa quién sea, pero en mucha mayor escala en el caso de que no sea peronista– tendrá que convivir con un Congreso en el que tendrá presencia minoritaria, con un tablero multicolor de gobiernos provinciales objetivamente desinteresados por la suerte de un precario Gobierno nacional, y con una opinión pública poco predispuesta a la paciencia con la “clase política”. Como si esto fuera poco, el presidente electo tendrá un mandato fijo constitucional de cuatro años que, en la

temporalidad del drama argentino, equivalen a una eternidad.

Ahora bien: ¿son estas críticas cuestiones las que ocupan a comunicadores, analistas e incluso a los actores políticos? No parece ser así. Predomina una especie de competencia por la radicalidad con la que se asume el clima antipolítico que ha ganado a la sociedad argentina. Los lamentos se concentran en el hecho de que no se ha resuelto la disminución hasta 25 por ciento del número de legisladores nacionales, como aconseja la Mesa del Diálogo Argentino, lo que podría provocar un grave daño a la representación legislativa de las minorías, en particular en los distritos más chicos. Otro tanto puede decirse del reclamo de caducidad de todos los mandatos, que —en nombre del “pueblo”— declararía nulo el voto positivo de millones de argentinos en la última elección legislativa. Y así de seguido: se reclama un cambio de régimen electoral a favor del voto por circunscripciones uninominales (tal el significado práctico de las invectivas contra las “listas sábanas”) que tendencialmente favorece la fragmentación política y la condición *ad honorem* de los concejales, y que presuponía un reclutamiento plutocrático del personal representativo. Se despotrica además contra el monopolio partidario de las candidaturas, como si alguien estuviera impidiendo la creación de nuevas fuerzas políticas en condiciones de competir con las que hoy existen (incluso está en tratamiento una norma que flexibilizaría los requisitos para su conformación respecto de los hoy vigentes, que son bastante generosos).

Probablemente, las balas de la “reforma política” estén apuntando al blanco equivocado. Dejan intacta la combinación de presidencialismo con disgregación “federal” del poder. No opinan sobre la sobrerrepresentación de algunas provincias que favorece la fragmentación del poder y tiende a obstaculizar la emergencia de fuerzas alternativas a los partidos tradicionales.

Hasta aquí, el programa de la “nueva política”, que es en realidad el de la antipolítica. Su cumplimiento llevaría al debilitamiento de la autoridad democrática central en momentos en que la crisis demanda poderes públicos fortalecidos y ampliamente legítimos. Afectaría además la presencia institucional de las

minorías y lesionaría la posibilidad de emergencia de nuevos actores políticos dada la histórica dificultad de éstos para incidir electoralmente en las provincias chicas sobrerrepresentadas electoralmente. Ahora bien, la dirigencia política ha adoptado en forma mayoritaria un rumbo antagónico con esta plataforma “renovadora”: no impulsan las reformas peligrosas para la gobernabilidad pero tampoco ningún otro cambio medianamente trascendente. Su accionar parece partir del diagnóstico siguiente: si la situación económica mejora o por lo menos deja de empeorar y se consigue un cierto apaciguamiento del conflicto social, entonces la furia antipolítica pasará y no harán falta grandes cambios; y si, por el contrario, todo sigue empeorando, no habrá reforma institucional que salve a esta dirigencia política. En consecuencia, conviene dejar todo como está y concentrarse en la lucha por condicionar favorablemente la ingeniería y el calendario electoral según sus intereses. Una ilustración de esta conducta la ofrece la Provincia de Buenos Aires, en cuya legislatura permanecen “gajoneados” varios proyectos de reforma política y electoral, y donde, en cambio, se ha discutido acaloradamente y aprobado un proyecto que permite al Gobierno separar en el tiempo las elecciones en el distrito respecto de los comicios presidenciales. El desdoblamiento apunta a “provincializar” las elecciones, de modo de evitar efectos de arrastre de las nacionales; de esa manera se preservan de mejor forma las posiciones de las estructuras orgánicamente consolidadas en la provincia. A este respecto, el decreto de convocatoria nacional no hace sino agregar una dosis de pintoresquismo subdesarrollado a este cuadro: dispone en un artículo, que el 10 de marzo sea la fecha de elección para legisladores nacionales... y en el artículo siguiente, faculta a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, a hacerlo en la fecha que dispongan.

La reforma política no es un recurso mágico para asegurar una dirigencia proba y eficaz. No es buena, por otro lado, la intención de convertir linealmente un comprensible estado de furia popular contra los políticos, en una determinada ingeniería institucional. Sin embargo, la naturaleza de esta crisis general que vivimos resulta una ocasión propicia para

la deliberación sobre nuestro régimen político, sobre cómo fortalecer el poder estatal democrático, preservarlo de su crónica inestabilidad y de los bloqueos propios de la particular estructura federal del país: en ese sentido sería muy importante el debate sobre la conveniencia de un régimen semiparlamentario o semipresidencialista que flexibilice la reacción del sistema ante las crisis institucionales e incentive conductas de colaboración en el ámbito del Congreso. También interesaría una discusión sobre el régimen electoral que dé cuenta de las tensiones que plantea el hecho de que al Presidente lo eligen los grandes distritos y en las mayorías congresales pesan decisivamente las provincias chicas (por definición constitucional en el caso del Senado, y por sobrerrepresentación electoral en Diputados). En cuanto a los partidos políticos, tal vez sería interesante abandonar el terreno de la acción expresiva condenatoria para pasar al terreno de una estrategia de cambios viables. En este sentido hay un tema central notablemente ausente de la discusión pública: el entrelazamiento orgánico entre las estructuras partidarias y los diversos niveles del Estado. Este fenómeno que se ha dado en llamar la “cartelización” de los partidos políticos alienta conductas colusorias y corporativas entre grandes maquinarias partidistas casi indiferenciadas en términos programáticos, que utilizan los recursos del Estado para reproducir su poder por medio de prácticas clientelares que incentivan el factionalismo en el interior de los partidos. Para deslazar ese tejido, hoy que discute públicamente una profunda reforma del Estado que apunte básicamente a profesionalizar en forma gradual a su personal, y a transparentar su funcionamiento.

Vista en esta perspectiva, la reforma política no es una gesta heroica sino una agenda modesta y gradual. No traerá de la noche a la mañana la dirección de los asuntos públicos, a esos ciudadanos virtuosos cuya supuesta presencia en algún sitio desconocido parecen presuponer algunos enfoques periodísticos. Por ahora, la política argentina fluye entre la condena indignada de la opinión pública, la tribuna moral erigida por ciertos comunicadores y las maniobras de la dirigencia para capear el temporal sin cambios significativos. □

La Convertibilidad sólo fue una burbuja sostenida en el endeudamiento externo

La crisis argentina y las deudas del progresismo

A partir de un profundo error en la caracterización de la situación económico-social, el progresismo no logró articular en ningún momento una política de gobierno destinada a dar solución a los problemas centrales. En cierto sentido admitió como verdadero el concepto dominante sobre los presuntos éxitos del programa liberal. Y, fundamentalmente, careció de un proyecto autónomo y sustentable de país.

Eduardo Hecker*

En los últimos años parecería haberse generado cierto consenso entre los intelectuales de las ciencias sociales acerca de la profundidad de los cambios que introdujeron en la economía y en la sociedad argentinas las políticas de la dictadura militar instalada en 1976. La abrupta apertura de la economía, la política cambiaria y la liberalización financiera generaron un proceso de desindustrialización del aparato productivo.

Los años 80 fueron, al igual que para toda América latina, la década perdida; y apenas en los inicios de los noventa la actividad económica volvió a activarse. Sin embargo, ese aparente crecimiento tuvo un elevado costo, que hasta el día hoy estamos pagando, y que se traduce —fundamentalmente— en el extraordinario incremento de la desocupación, la pobreza y la indigencia.

Los últimos datos sobre la situación de los hogares en términos de empleo e ingresos revelan la profundidad de la emergencia económica y social. Algunos sectores atribuyen este fenómeno —con ligereza y clara intencionalidad— a la caótica salida del régimen de Convertibilidad. Si bien es posible formular variadas críticas a las medidas adoptadas por el actual Gobierno, lo cierto es que el país venía de una larga recesión iniciada en 1998, y que las bases de sustento de la Convertibilidad ya se encontraban técnica y políticamente agotadas.

La economía ofreció numerosos “avisos” de que el camino adoptado conducía a la generación de efectos perniciosos. Esto se puede apreciar, por ejemplo, analizando la evolución

de la tasa de desempleo.

Quienes gustan de las miradas de largo plazo pueden comprobar que, efectivamente, la tendencia al alza se inicia durante la dictadura militar y se mantiene prácticamente inalterada. Sin embargo, en el camino ocurrieron significativos sucesos y señales de alerta que no fueron debidamente advertidos, y a la vez, fundamentalmente, la tendencia al incremento de la desocupación se profundizó notablemente durante la última década.

A partir de la implementación del Plan de Convertibilidad, la tasa de desempleo en el Gran Buenos Aires comienza a crecer en forma ininterrumpida, y alcanza un pico superior al 20 por ciento en mayo de 1995. Ése ha sido, muy probablemente, un significativo punto de inflexión que pasó inadvertido para muchos sectores del progresismo.

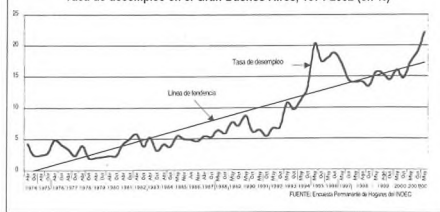
El principal hecho de los noventa fue el crecimiento de las tasas de desocupación hasta niveles inéditos para nuestro país, y peor aun, el sosteni-

miento de dichos índices a lo largo de la década. Esta consideración bastaría para refutar el supuesto carácter “exitoso” del modelo económico implementado en esos años, incluso durante las etapas en las que el producto bruto crecía a tasas considerablemente altas.

Recordemos que por entonces el eje discursivo que aglutinaba a los sectores del progresismo se apoyaba en la lucha contra la corrupción y en la demanda de mayor transparencia en la ejecución de las políticas públicas. En este marco, la idea subyacente era que a través de una adecuada administración del régimen, mejorando la transparencia de la gestión y actuando focalizadamente sobre la pobreza, se podría mejorar sustancialmente la situación social. Esta óptica se sumaba —consciente o inconscientemente— a la idea de que el desempleo y la pobreza eran consecuencias indeseadas del shock de políticas neoliberales, y por ende, reversibles en buena medida. Se trataba de una visión contradictoria con las tendencias heredadas.

Ese primer aviso no fue tenido en cuenta y el progresismo se ató, equivocadamente, al discurso contra la corrupción como eje de una línea transformadora, y a la necesidad de implementar un set de políticas contra la pobreza. Se trató de otro error conceptual que no registró adecuadamente los cambios que se estaban produciendo en la sociedad argentina.

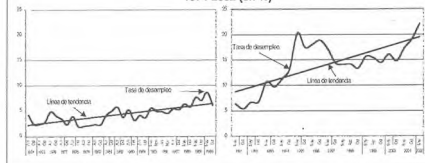
Tasa de desempleo en el Gran Buenos Aires, 1974-2002 (en %)



Cuando un país tiene una tasa de desempleo inferior al seis por ciento o al siete por ciento, ejecutar políticas focalizadas tiene cierto sentido por cuanto, a partir de un adecuado diagnóstico acerca de los núcleos o "bolsones" de pobreza, se puede trabajar para paliar el fenómeno y desa-

rollar estrategias de reinserción laboral e inclusión social. Pero cuando el desempleo se transforma en un fenómeno tan masivo y generalizado, la única respuesta posible es el desarrollo de políticas universales contra la pobreza y la implementación de subsidios directos.

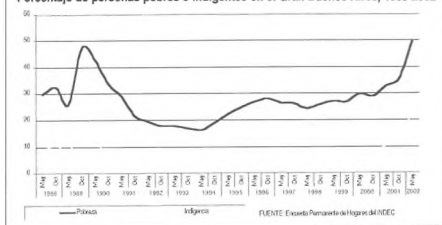
Evolución histórica de la tasa de desocupación en el Gran Buenos Aires, 1974-2002 (en %)



Es el único camino para actuar en consecuencia y promover una redistribución del ingreso nacional. En ese marco, implementar políticas focalizadas no es otra cosa más que una gota de agua en medio del desierto, independientemente de la mayor o menor transparencia que se aplique en su administración.

Aun así, y prescindiendo de cualquier juicio valorativo, desde un punto de vista económico ha quedado demostrado que, para el Estado, las políticas de aliento a la producción y el empleo son menos costosas en términos intertemporales que las políticas sociales tendientes a cubrir estas falencias.

Porcentaje de personas pobres e indigentes en el Gran Buenos Aires, 1988-2002



A pesar de las mencionadas señales de alerta, fue notoria la falta de respuesta, tanto desde lo productivo como desde lo social. Y tal vez buena parte del error haya consistido en no analizar ambos fenómenos como caras de una misma moneda: la desintegración del aparato productivo conlleva la des-

integración social.

Es cierto que los sectores políticos y económicos predominantes actuaron con absoluta irresponsabilidad, actitud que no ha sido la nota dominante y generalizada en todos los países de América latina y/o en todas las circunstancias. Por ejemplo, no resulta trivial re-

cordar que la privatización de la empresa telefónica en México se hizo sin generar ningún despido de personal. Los mexicanos son conscientes de la necesidad de resguardar los puestos de trabajo, seguramente debido a la cuantiosa población que reside en su territorio (cerca de 100 millones de habitantes). En la Argentina ni siquiera existió esa preocupación y las privatizaciones llevaron a miles de trabajadores a la desocupación.

Bajo la Convertibilidad, el atraso cambiario generó un sesgo desfavorable para la producción industrial y, de este modo, el tejido productivo se fue debilitando cada vez más, y se exacerbaban así los efectos negativos sobre el empleo.

Y para completar el cóctel, el país comenzó a endeudarse a niveles sólos comparables con los de la dictadura militar (y aun más), tanto para sostener artificialmente el consumo de los sectores medios (y, fundamentalmente, de los de mayores recursos) como el déficit fiscal que se generó, sustancialmente, como resultado de una débil política recaudatoria y una reforma previsional encarrada con un inadecuado horizonte de planificación intertemporal y el desequilibrio externo ante la fuga de capitales generada por los empresarios locales que empezaron a vender sus empresas. Durante la Convertibilidad salieron de la economía argentina más de 70 mil millones de dólares, y el total de capitales fugados alcanzó unos 110 mil millones de dólares hasta la actualidad.

Recordemos que, tras la cesación de pagos iniciada en 1988 y el comienzo de un proceso de negociaciones y pagos voluntarios parciales a partir de abril de 1990, sólo tras la firma del Plan Brady, en 1992, el país pudo salir del *default*. Tras ese proceso de renegociaciones, la deuda pública se redujo a unos 60 mil millones de dólares, de los cuales prácticamente la mitad estaba garantizada con activos financieros.¹

Sin embargo, a partir de la firma del Plan Brady el país reinició una intensa etapa de endeudamiento, el cual asumió hoy a casi 120 mil millones de dólares (es decir, el doble del de aquel entonces), con el agravante de un nuevo *default* y una carga de intereses de

la deuda que, antes de la cesación de pagos, ascendía al seis por ciento del PBI y al 25 por ciento del presupuesto público.

Esto no significa, al menos no necesariamente, que el Plan Brady fuera un error técnico. El estrangulamiento tuvo lugar porque la Convertibilidad no funcionaba sin ese combustible que fue el endeudamiento externo. Garantizar la paridad un peso = un dólar implicó sostener un patrón de consumo, ahorro e inversión distorsionado debido al creciente atraso de nuestra moneda. De allí que el ajuste recesivo fuera una de las principales vías para intentar cerrar ese creciente desequilibrio global de la macroeconomía. El principal apóstol de tal lineamiento fue Ricardo López Murphy, cuya propuesta consistía en reducir los salarios y ajustar drásticamente el gasto público.

No era otra cosa más que "manotazos de ahogado" para intentar sostener un régimen que, cumplido su objetivo de estabilizar la economía,ataba las potencialidades para el desarrollo productivo. La deuda externa es el costo que el país debe afrontar por el sostenimiento de un régimen económico cuyos beneficios no se distribuyeron equitativamente entre toda la sociedad, sino que tendieron a concentrarse en torno a unos pocos sectores económicos.

En otras palabras, la Convertibilidad, que debía ser un instrumento estabilizador, se terminó transformando en un régimen económico que socavó la estructura productiva y el tejido social, y que llevó al país a la actual situación de emergencia económica y social, inédita en la historia por su magnitud y profundidad.

En este marco, progresistas y conservadores debatían sin salir del laberinto. Para unos, había que administrar con transparencia y con criterios más equitativos. Para otros, había que profundizar el ajuste recesivo. Curiosamente, terminaron coincidiendo — consciente o inconscientemente — en este último punto.

A mediados de 1998, y en forma simultánea con el inicio de la crisis asiática, comenzó la recesión. Resulta interesante apreciar su evolución a través del seguimiento de los indicadores de la producción industrial. El Estima-

dor Mensual Industrial (EMI) presenta una clara tendencia descendente, la cual se agudiza en el inicio de 1999 ante la devaluación de la moneda brasileña (hecho que limita las exportaciones hacia nuestro principal socio — y cliente — comercial). Sin embargo, a mediados de ese año la tendencia comienza a revertirse. En esta reversión seguramente jugó un papel importante la implementación del denominado Plan Canje Automotor, el cual contribuyó a reactivar la producción automotriz.

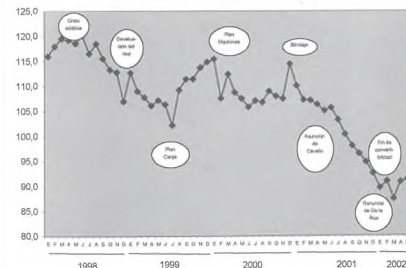
La recuperación de la producción industrial se mantiene en forma sostenida hasta diciembre de 1999, cuando, precisamente, José Luis Machinea asume como Ministro de Economía y anuncia la implementación de un fuerte ajuste fiscal y un alza de los impuestos.

Los resultados fueron claros (y previsibles): si a una economía que comienza a salir de una recesión se le aplica un ajuste, el efecto es abortar la recuperación de la economía y retomar el ciclo recesivo. Se trató de un grave error del cual ya no había posibilidades de retorno, máxime cuando no

existió plan alguno para superar la restricción global de la Convertibilidad.

A partir de entonces, la producción industrial, tras cierto "amestamiento" durante el año 2000, comenzó a desplomarse. Ese amestamiento acaró cuantiosas pérdidas de posibilidades de crecimiento, de mejorar el ingreso *per capita*, y conllevó el alejamiento de la frontera tecnológica internacional, con sus consecuencias sobre la productividad. Recordemos que la única chance para sostener ese nivel de apertura, atraso cambiario y creciente dolarización era alcanzar un nivel de productividad similar al de las mejores prácticas productivas internacionales. Ante la debilidad de la estructura productiva y la imposibilidad de superación por la vía de la innovación tecnológica, la carrera de la productividad ejerció presiones sobre el ingreso de los sectores asalariados y el empleo en general. De allí que, durante la última fase de la Convertibilidad, los incrementos de productividad en la industria se dieran mediante una creciente expulsión de trabajadores y una mayor carga laboral sobre aquellos que conservaron sus puestos de trabajo.

Evolución del Estimador Mensual Industrial
Serie desestacionalizada. Base 1993=100



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Como resultado de esta grave crisis, en la actualidad nuestra industria produce en niveles similares a los de 1974, sólo que con una estructura de

menor "densidad", menor calidad de entramados e integración productiva y, fundamentalmente, con un nivel de desempleo casi cinco veces más alto.

Un modelo no puede ser exitoso si de él resultan índices de desempleo, pobreza y desintegración productiva como los que hemos debido afrontar. La Convertibilidad no fue un modelo de crecimiento sino tan sólo una burbuja que se sostuvo gracias al crecimiento endeudamiento exterior.

Una de las deudas del pensamiento progresista, al menos en los últimos años, ha sido la falta de una formulación de un modelo de país con crecimiento económicamente sustentable y socialmente inclusivo. La formulación de los instrumentos económicos es, sin duda, una asignatura pendiente.

En tal sentido, y a modo de ejemplo, cabe destacar que nuestro país no ha sabido implementar programas macroeconómicos acompañados de un decisivo y constante apoyo a la producción en general y a las pequeñas y medianas empresas en particular, con sentido estratégico. La política productiva y hacia las pymes nunca fue asumida como política de Estado; quedó permanentemente relegada al mero voluntarismo de tercetos o cuartas líneas de los ministerios o a discursos vacíos de contenido de la casi totalidad de los gobernantes.

La confusión generada en torno a que con menos corrupción y más transparencia bastaba para sentar las bases del desarrollo económico y social, condujo a la pretensión de acortar los tiempos. Es obvio que la eliminación de la corrupción y de las políticas clientelares y prebendarias forman parte de la construcción de un país moderno y progresista. Sin embargo, nuestra historia demuestra que con eso no basta. □

Notas

¹ Economista. Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

² Se trató de la adquisición (financiada por los organismos internacionales) de un bono "cupón cero" del tesoro norteamericano que "colateralizaba" la deuda, por cuanto al momento de maduración del bono, su valor sería equivalente a la deuda argentina en bonos. De esta manera, el pago del capital estaría asegurado al vencimiento mediante el uso de ese bono colateral.

Sensibilidad progresista y ejercicio del poder

Gobernabilidad y corrupción

El fenómeno de la corrupción debe dejar de ser entendido como una disfuncionalidad ética de los dirigentes, para ser interpretado en términos de un modo particular de funcionalidad política. Sólo si se asume este desplazamiento será posible empezar a pensar algún cambio.

Hernán Charosky

Durante toda la década del 90, la cuestión de la corrupción política fue un eje de comunicación en discursos políticos y mediáticos. A la vez que organizó la identidad de la oposición al gobierno de Menem, fomentó la producción de una literatura periodística en la que aún hoy se cruzan asuntos políticos, judiciales y policiales.

De Menem a la Alianza

En los últimos años de la década, esta comunicación, además, incluyó una versión propositiva, según la cual la corrupción gubernamental era una clave explicativa de los efectos negativos de las reformas estructurales –desempleo, inequidad en la distribución de la riqueza, aumento de la pobreza, etcétera– y su eliminación traería el bienestar que se añoraba. Esta versión fue promovida por los líderes de la Alianza desde 1997 y les permitió estructurar una iden-

tidad antagónica a la del PJ sin necesidad de plantear rupturas ideológicas en el plano económico. Es decir, era un instrumento adecuado para una estrategia de oposición con expectativas de llegar al gobierno: cambio sin ruptura.

Con la llegada al gobierno de la fórmula De la Rúa-Alvarez, tuvieron lugar algunas iniciativas que hicieron de aquel impulso hacia la transparencia el comienzo de unas políticas: la creación de la Oficina Anticorrupción, la reactivación de la Sindicatura General de la Nación, entre otros.

Este ímpetu fluyó sin problemas mientras los organismos de control relevaban algunos de los más sonados casos de corrupción del menemismo. Sin embargo, la emergencia del caso de los sobornos en el Senado, la crisis política que la acompañó y, paralelamente, la falta de resultados en cuanto a reactivación económica, hicieron de las señas de identidad de la Alianza algo menos que una mueca vacía.

En efecto, a partir de aquel momento, se hicieron evidentes algunos hechos que erosionaron las certezas con las que la coalición había convencido al electorado. La corrupción había dejado de ser el origen de los males económicos, y se asumió rápidamente el argumento de que la piedra de toque de la recesión estaba en el enorme déficit fiscal heredado y en la consiguiente falta de confianza de los mercados financieros. Por otra parte, había quedado claro, con el escándalo de los sobornos y la renuncia de Álvarez, que el cambio de hombres y partidos en el Gobierno no implicaba automáticamente el fin de la corrupción.

Respecto de este caso, el Gobierno, que contaba con los resortes políticos para dar alguna solución –ya fuera tomando las medidas necesarias para ac-

ceder a la verdad, ya fuera articulando un plan "cosmético" que diera esa imagen–, apostó, en cambio, a que el asunto se diluyera con el tiempo. Cosa que quizás logró, pero seguramente con un altísimo costo en cuanto a su imagen política, que seguramente contribuyó a la facilidad de su caída.

Sin embargo, el impulso adquirido por los organismos de control produjo importantes hallazgos respecto de circuitos de corrupción en la administración pública nacional, algunos de los cuales habían atravesado con pocas o ninguna mejora el cambio de gestión.

Entre otros informes relevantes, la SIGEN produjo información acerca del favorecimiento ilegal de empresas de comunicación desde el COMFER y desde la Comisión Nacional de Comunicaciones durante el gobierno de Menem, beneficios injustificados recibidos por concesionarios de servicios públicos en ambas gestiones y la desarticulación de mecanismos de control sobre los prestadores del seguro de salud, también durante ambas gestiones.

La Oficina Anticorrupción, por su parte, realizó un importante número de denuncias judiciales respecto de algunos de los hechos de corrupción de la gestión menemista, tales como los ocurridos en el PAMI, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de la Función Pública, entre otros. Pero tempranamente, incluso antes de la emergencia del caso del Senado, había comenzado a detectar áreas en las que la discrecionalidad y el favorecimiento político habían continuado: los aportes del Tesoro nacional, los subsidios a obras sociales y contrataciones destinadas al sistema de salud financiadas con créditos internacionales.

El caso del Senado, además, puso de manifiesto que la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado –a la cual diversas versiones señalaban como fuente de sobresueldos de jueces, legisladores y periodistas– era un objeto de imposible control para los organismos de control, la Justicia y el Congreso.

La crisis aliancista dejó vacante la cuestión de la lucha contra la corrupción como seña de identidad política. Este espacio fue rápidamente ocupado por Elisa Carrió, quien, desde la Comisión de Investigaciones sobre Lavado

de Dinero de la Cámara de Diputados, promovió la investigación de las actividades del Banco Central. Más allá de las discusiones acerca de la consistencia y novedad de la información reunida en los diversos dictámenes que emitió la comisión, deben reconocerse al menos dos éxitos, independientemente del valor que se le asigne. Por una parte, las revelaciones acerca de la pasividad del BCRA en el control de ciertas operaciones –en particular, las relacionadas con el CEI y el grupo Moneta– y el carácter dudoso del funcionamiento del organismo en las liquidaciones de varios bancos –información que ya estaba presente en varias causas judiciales–, lo que puso de manifiesto la necesidad de transparencia en la actividad regulatoria del mercado financiero. Por otra parte, influyó de manera determinante en la finalización de la gestión de Pedro Pou al frente del organismo.

En general, el escaso avance judicial de la totalidad de los casos mencionados se vincula con otro dato relevante de la gestión aliancista. El alineamiento de los jueces federales en lo penal de la Capital con el gobierno de Menem y las

múltiples denuncias contra ellos –por enriquecimiento ilícito y por abandono de las causas a su cargo– que dormían en el Consejo de la Magistratura, resultaban suficiente motivo para que el Gobierno encarrara alguna estrategia de renovación de los cargos de ese sector. Más aun si había alguna expectativa de que las denuncias sobre corrupción tuvieran algún progreso ante los tribunales.

Sin embargo, nada de esto ocurrió. A pocas semanas de asumido el Gobierno, éste envió al Poder Judicial un "mensaje tranquilizador", que consistió en la promesa de no usar los resortes disponibles para producir cambios. La continuidad de los jueces amplia y fundamentada cuestionados tuvo como objetivo mantener bajo control una variable que podía producir ruidos políticos –con la oposición o hacia dentro del Gobierno– en la medida en que se avanzara en el enjuiciamiento de funcionarios y dirigentes políticos de relevancia. La mencionada estrategia política esta vez sí usó la "cosmética" de la del respeto a la independencia del Poder Judicial. Esta decisión tuvo como resultado paradójico



Paisaje (1925)



La luna (1928)

co el hecho de que, durante este período, motivados en el espíritu inicial de la Alianza, se realizarán importantes avances en cuanto al conocimiento de actos y circuitos de corrupción, las áreas y procesos del Estado más vulnerables, y se individualizarán responsables, pero no hubiera sanciones.

Del cuestionamiento ético al cambio político

Si se repasa la lista de áreas respecto de las cuales se produjo información relevante sobre irregularidades, desvío de fondos y concesión favoritista de derechos, surgirá, de inmediato, una lista de los sectores beneficiados por esas decisiones: gobernadores y caudillos territoriales favorecidos con subsidios a obras sociales varias veces millonarios, medios de comunicación a los que se les "perdonan" multas y se les otorgan derechos sin contraprestación alguna, concesionarias de servicios pú-

blicos, bancos que reciben redescuentos en condiciones más que dudosas, liquidaciones que favorecieron a algunos accionistas.

Un análisis de cada uno de estos casos, pero sobre todo, de la relevancia política de cada uno de los actores de la sociedad que aparecen interactuando con el Estado en los casos de corrupción, muestra que el problema no es cuantitativo. No se trata de saber, simplemente, "cuánto dinero se va en corrupción" para calcular así el bienestar faltante. Más bien el asunto es medir hasta qué punto los así llamados hechos de corrupción son intercambios entre Gobierno y actores clave de la política. En efecto, si se observa la lista de sectores beneficiados, se llegará a la conclusión de que se trata de factores determinantes de cualquier política de gobierno nacional, muchos de ellos con capacidad de veto.

Por lo tanto, la cuestión de la corrupción debe dejar de ser entendida como una disfuncionalidad ética de los diri-

gentes, para ser interpretada en términos de un modo particular de funcionalidad política. Sólo si se asume este desplazamiento será posible empezar a pensar algún cambio. De lo contrario, se continuará en la infructuosa vía del pensamiento cándido, y en lugar de creer, como antes, que el cambio de un partido por otro conllevaría el fin de la corrupción, creemos que si "se van todos", vendrán las personas "correctas" a gobernar.

Por el contrario, si se tiene en cuenta que la corrupción, o por lo menos, que cierta clase de hechos de corrupción están enmarcados en intercambios entre el Gobierno y ciertos actores, intercambios que, más allá de la buena o mala voluntad de los dirigentes, hacen al modo particular de gobernabilidad de este país, entonces se evidenciará la necesidad de pensar no ya en términos voluntaristas, sino de estrategia política e institucional. Significa pensar en la sustentabilidad política de un proyecto anticorrupción, en su viabilidad institucional, en los organismos requeridos para llevar a cabo investigaciones y para promover sanciones, en el rol de cada uno de los poderes del Estado, en el acceso público a la información, entre otras cuestiones. También supone que no se trata de designar uno o más lugares especializados en "combatir la corrupción", sino de hacer de esto una política que corte transversalmente todas las decisiones. Pero, sobre todo, significa prever un cálculo: el de la emergencia de obstáculos y vetos provenientes de los actores perjudicados por la interrupción de los intercambios ilegítimos. Y, por consiguiente, también significa prever cuáles serán los "equivalentes funcionales", los sustitutos legítimos de aquello que fue abandonado.

Esta previsión política, como se ve, no es específica de una eventual estrategia anticorrupción; no es otra cosa de lo que, en general, tendrá que hacer cualquier fuerza progresista que pretenda gobernar: saber con quiénes y en qué términos. Es decir, las preguntas que hay que realizarse para encarar cualquier política anticorrupción no son otras que las que también deben ser contestadas para saber si alguna vez la persistente "sensibilización progresista" estará en condiciones de ejercer el poder. □

Podés dar tu consentimiento como donante de órganos en los hospitales públicos de la Ciudad.



0800-999-2727

gobBsAs

Nuevos y difíciles desafíos de la democracia

No hay sociedad sin moneda

Después de la caída del presidente De la Rúa, la crisis argentina inició una nueva página en su larga historia. En esta nueva secuencia exhibe varios presupuestos centrales, de entre los cuales voy a elegir para destacar en este texto, la crisis de legitimidad de la moneda. Así como en 1989 el colapso hiperinflacionario destruyó las reglas básicas de la economía y aniquiló la moneda, hoy la incertidumbre económica, la devaluación y la inflación en curso han hecho perder al peso su carácter de unidad estable de referencia.

Hugo Quiroga

La consecuencia es que el dólar como moneda ampliamente la economía y los ciudadanos se ven obligados, como antes, a desarrollar estrategias de supervivencia frente a esa tiranía y frente a la devaluación de la moneda nacional. Los ahorristas confían únicamente en el dólar como reserva de valor, en una moneda extranjera sobre la cual las clásicas políticas gubernamentales no puedan influir ni alterar su valor. Tanto la hiperinflación de 1989 como la crisis actual revelan la pérdida de confianza en el peso. Trataré de explicar más abajo el rol de la moneda en estos dos momentos críticos de la democracia argentina, a partir de visualizarla como una de las relaciones sociales constitutivas del orden colectivo, lo que indica que su función excede a la de un instrumento de cambio.

Legitimidad de la moneda

Mi punto de vista sobre la moneda se apoya en los fundamentos de la obra colectiva *La monnaie souveraine*, que dirige Michel Aglietta y André Orléan.¹ Prevalce en la obra un fuerte rechazo a una concepción instrumental de la moneda, que la reduce a mera intermediaria del cambio, y esta crítica permite una mirada diferente en las ciencias sociales al sacar el hecho monetario de la discusión de la esfera exclusiva de los economistas. El análisis de la moneda será otro si adoptamos una visión político-social (como aquí pretendemos), cuyo entramado será distinto del

de un enfoque economicista. A través de un bien común como la moneda, esencial para la organización de la vida colectiva, se puede pensar económicamente el vínculo social y demostrar sus capacidades institucionalizantes. La moneda moderna sigue siendo la expresión de la sociedad como totalidad; ella conserva el status de operador de la pertenencia social y se presenta ante los individuos como una norma de base de la sociedad, de la misma manera que la Ley o la prohibición moral. La idea fuerza, por tanto, es que con la moneda se juega una relación particular de los individuos con la totalidad social. En definitiva, ella no es solamente el producto de un proceso vinculado con el intercambio mercantil, sino que es fundamentalmente una institución social.

Carlos Menem accedió al poder en un momento de conmoción económica, donde estuvo en juego la tranquilidad de la sociedad argentina cuando se destruyeron las reglas básicas de la economía y la moneda nacional perdió el carácter de unidad estable de referencia y fue reemplazada por el recurso del dólar. Es aquí donde quiero utilizar el concepto de legitimidad de la moneda de Aglietta y Orléan, que alude al conjunto de procesos complejos por los cuales la moneda es aceptada plenamente en el seno de la comunidad. Este concepto va mucho más allá del orden monetario, para reposar en la autoridad de lo social. En torno a la estabilidad de la moneda, se cierra un acuerdo común para fundar un orden de valor, cuya fuente de legitimidad es lo que declara creer la sociedad: el valor de la moneda

se basa en la confianza que le atribuyen los ciudadanos. En cuanto bien público, debe encontrar en la aceptación colectiva el fundamento de su legitimidad. La aceptación de la moneda no se reduce a un cálculo racional de costos y beneficios, sino que moviliza creencias y valores a través de los cuales se afirma la pertenencia a una comunidad. En la Argentina de hoy vemos los límites que tiene la acción del Estado para restaurar la confianza en la moneda, luego de la devaluación y la inflación ascendente de comienzos de 2002.

Ahora bien: ¿por qué la moneda no está desprovista de funciones políticas y, en consecuencia, asegura la regulación de la interdependencia que existe entre el orden económico y el político? Al ser unidad de cuenta del conjunto de la sociedad, la moneda es una instancia de regulación entre el orden económico y el político, por lo que su rol se sitúa entre una esfera y otra. Como unidad de cuenta común es, por tanto, el resultado del compromiso entre actores económicos y actores públicos. Precisamente, la "crisis" de legitimidad de la moneda tiene que ver con la función de unidad de cuenta de referencia de toda la sociedad, es decir, con el incumplimiento de la función de regulación entre el orden económico y el político.

Hiperinflación, estabilidad democrática y rol de la moneda

El colapso hiperinflacionario de 1989 puso en evidencia la crisis de la función reguladora de la moneda y las dificultades que ella tuvo, en tanto unidad de cuenta común, para asegurar la articulación entre el orden económico y el político. En buena medida, este colapso resumió décadas de alta inflación y situaciones de devaluación permanente experimentadas por nuestra economía, la que en su inestable desarrollo devoró en los últimos treinta años varios signos monetarios. A raíz de esta crisis de legitimidad, se utilizó el dólar como moneda de ahorro y de transacción. Tal pérdida de confianza sacó a la luz los conflictos y las inquietudes inherentes

a la incertidumbre que provocaba el desorden financiero. Los símbolos de esa crisis fueron la inestabilidad monetaria y la ausencia de autoridad pública, y ya sabemos que los símbolos tienen un valor funcional y forman parte del mundo humano del significado.² En este sentido, la esfera de lo simbólico contribuye a configurar la realidad. Es por eso que el problema de la legitimidad de la moneda se presenta también en el orden simbólico.

Hoy se puede observar con mayor claridad que el proceso de transición a la democracia se vio enfrentado a dos órdenes diferentes de inestabilidad: la política y la monetaria. De la primera se pudo salir con una democracia electoral estable, y de la segunda, con la Ley de Convertibilidad, que dio lugar a la confianza en el peso y, por ende, posibilitó la estabilidad de precios y la baja inflación. Restablecida la democracia, el gobierno de crisis que nació en 1989 tuvo que resolver dos graves problemas para poder disipar un escenario de alto riesgo (la debilidad de la autoridad política y la crisis de legitimidad de la moneda), sin lo cual no era posible el ejercicio de la política ni la reorganización de la economía. Lo que ha demostrado, entonces, la transición argentina es el rol social de la moneda en la estabilidad de la democracia en la década del 90. En ese momento, la moneda tuvo claras capacidades institucionalizantes, fue un pilar de la democracia en la medida en que formó parte de la integridad del orden social. En mi opinión, el potencial democratizador se debe colocar en la estabilidad de la moneda y no en el supuesto institucionalizante de los mecanismos de mercado. La moneda, junto al Estado y la solidaridad, es un elemento de cohesión social,³ y es fuente de seguridad. La estabilidad de la moneda se encuentran, por ende, en las antípodas de los desórdenes político y financiero.

Cuando la moneda de un país deja de ser estable y la inflación se convierte en el drama de todos, se crean condiciones para la disgregación social. La trágica experiencia alemana de 1923 demostró que la principal defensa de una sociedad es la solidez de su moneda; es lo que lleva a Adam Ferguson⁴ a advertir que para destruir un país, lo primero que hay que hacer es corromper el dinero.

La inflación tiene tanto que ver con el dinero como con la convivencia social. La inflación es una "enfermedad política", es decir, es un tipo de inestabilidad económica que crea inseguridad en los ingresos y rentas. Lo cierto es que la Argentina inflacionaria no pudo en las últimas décadas ponerse a resguardo del desorden económico y fiscal, de la tiranía del dólar o de la vieja secuencia devaluación/inflación. Los diez años de estabilidad monetaria (1991-2001) sucumbieron ante la crisis de la paridad cambiaria y la devaluación de comienzos de 2002.

Una vez que la hiperinflación fue controlada, desapareció la causa principal del desconcierto, el miedo y el desánimo de los ciudadanos, y la estabilidad de la moneda se convirtió progresivamente en el nuevo valor a respetar y defender. Precisamente, esa estabilidad fue un objetivo central de la política económica, y en esa dirección, la Convertibilidad y el tipo de cambio fueron sus instrumentos. El sistema de Convertibilidad, que fijó la paridad uno a uno, prohibió al Banco Central emitir moneda sin respaldo en divisas; de esta manera puso fin a una de las fuentes abusivas de financiación del Estado. Al mismo tiempo, se erradicaron los mecanismos indexatorios que por largos años actualizaban los precios. No obstante el éxito inicial, surgieron otros desafíos vinculados al crecimiento sostenido, la pérdida de competitividad



Postal (1929)

comercial, el déficit fiscal y el alto desempleo, que rápidamente pusieron de manifiesto los límites de la Convertibilidad. En algunas interpretaciones económicas, su éxito duradero exigía una sólida política fiscal, lo que cuestionaba el incremento de la deuda externa para financiar los gastos del Estado. En cambio, en otras, el déficit fiscal fue funcional al sostenimiento de la Convertibilidad. En este sentido, lo que ha demostrado Mario Damil⁵ es el papel fundamental que cumplió la deuda pública externa al contribuir a la acumulación de reservas, situación que permitió el financiamiento del desequilibrio fiscal y del déficit en divisas de los sectores económicos privados, e hizo viable el crecimiento.

Devaluación y crisis monetaria

El abandono de los regímenes de Convertibilidad se ha hecho históricamente a través de la devaluación. Ésta es el resultado de una decisión política que implica la intervención consciente de las autoridades públicas, aun cuando sea impuesta—como ocurre la mayoría de las veces—por las circunstancias, esto es, por la especulación y la fuga de capitales. Es por eso que el éxito o fracaso de la devaluación es juzgado como un acto político que produce consecuencias en la sociedad. La devaluación no es una decisión que se pueda tomar con entusiasmo y goce, porque, en términos generales, las ventajas iniciales que ella suele traer, con el tiempo se diluyen a causa del agravamiento de la enfermedad política que es la inflación. En 2002 se devaluó la moneda y se suspendió el pago de la deuda externa, con medidas—como el congelamiento y la pesificación de los depósitos bancarios—que afectaron los patrimonios y el derecho de propiedad, lo que provocó una crisis de confianza de proporciones inéditas que se ha extendido a la moneda y al sistema financiero, hasta desembocar en una notable caída de la actividad económica.⁶ En rigor, lo que se ha derrumbado con la devaluación y la inflación en marcha es—apropiándose de un concepto de Natalio Botana⁷ la "constitución económica", aquella que asegura la estabilidad de la moneda y las reglas básicas de funcionamiento de la economía (sistema financiero, recaudación impositiva,

seguridad de los contratos, etcétera). Destruída la constitución económica, se liberan poderosas tendencias devastadoras, que pueden conducir a la lucha de todos contra todos en una infinidad de rivalidades privadas. Para volver a crecer y encontrar cierta armonía social hay que estabilizar primero la moneda.

En un manejo desesperado y errático en tiempos de crisis—que comenzó con Domingo Cavallo cuando se congelaron los dólares de los bancos y se destruyó la riqueza de los ahorristas, y continuó con el *default* de la deuda pública declarado por el Presidente Rodríguez Saá, hasta la devaluación y la pesificación forzadas del presidente Duhalde, pasando por la modificación de la Ley de quiebras (con el fin de reducir el derecho de los acreedores) y la violación de los contratos—, se puede percibir con nitidez la desaparición del sistema de confianza inherente a la constitución económica. La crisis monetaria actual revela una crisis de legitimidad de la moneda. Desde la salida de la Convertibilidad no se ha generado confianza en las nuevas reglas monetarias y, justamente, aquella crisis expresa el momento en el cual las reglas monetarias son desafiadas, en un contexto mucho más grave y amenazante que el de 1989. Ésta es la incierta realidad de un país cuya clase gobernante, en medio del desorden y las presiones, devaluó la moneda para mejorar la competitividad de la economía, sin tomarse la molestia de analizar si estaba preparada para hacerse cargo de una decisión que haría correr serios riesgos a la sociedad. La responsabilidad política de los dirigentes reside también en la precaución de no generar cambios profundos cuando sobrevuela el desorden y se duda sobre el rumbo que se propone seguir.

De nuevo peligra la moneda nacional. Entre un peso depreciado y la codiciada moneda norteamericana, se ubica una tercera moneda con los bonos provinciales y las LECOP, que circulan por todo el país a raíz de la recesión, de la escasez de crédito y de la falta de circulante, llenando de incertidumbre y molestia a sus obligados poseedores, que no ignoran que el respaldo de esos títulos radica en la solvencia del emisor, es decir, en el Estado nacional y en los Estados provinciales, que reconocieron sus insolvencias. En el mismo escenario, la gravedad

de la crisis ha hecho florecer una economía paralela con los centros de trueques, verdaderos mercados informales que configuran, en palabras de Max Weber, una "economía natural de cambio" (hay intercambio sin dinero) que contrasta con la "economía monetaria". Ésta es la verdad descarnada del "capitalismo que tenemos" los argentinos.

En fin, sin moneda nacional no hay autoridad pública posible ni cohesión social. Los períodos de inestabilidad monetaria son momentos en los cuales la sociedad tiene serias dificultades para ordenar el presente y proyectar el futuro. Ya lo sabemos: la interminable depreciación de la moneda acarrea inseguridad social, incertidumbre económica, deterioro moral, con grave repercusión en el sistema político y en sus capacidades decisorias. No vale la pena, pues, insistir en viejos errores. Dada la magnitud de la crisis, lo que se espera de los actuales gobernantes, ante todo y como primera medida de emergencia, es la recuperación de la confianza de los ciudadanos para estabilizar la moneda y ordenar la sociedad y así poder definir metas de largo plazo. Del éxito de esta tarea indudible dependerá asimismo la continuidad de la legitimidad democrática. No es fácil prever el curso futuro

de los acontecimientos; en el ciclo que está naciendo, no se puede descartar un escenario de disolución social y violencia. El orden monetario encuentra el mismo problema de legitimación que el orden político: la confianza social. Una vez más, la democracia se enfrenta con nuevos y difíciles desafíos. □

Notas

¹ El libro cuenta además con las contribuciones de J. Andreau, M. Aspasch, J. Brousse, J. Cartelier, D. de Coppet, Ch. Lamoult, J.M. Servet, B. Thérêt, J.M. Thivaud, Editions Odile Jacob, Paris, 1998.

² Véase Ernst Cassirer, *Ensayo sobre o Hombre. Introducción a una filosofía de la cultura humana*, Martins Fontes, San Pablo, 1997.

³ Cf. Jürgen Habermas, *Más allá del Estado nacional (Las hipotesis de la restauración de Adenauer)*, Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 114.

⁴ Adam Ferguson, *Cuando muere el dinero*, Alianza, Madrid, 1984.

⁵ Mario Damil, "El balance pague y la deuda externa pública bajo la convertibilidad", en *Boletín Informativo Techint*, p. 303, julio-septiembre de 2000. Mi agradecimiento a Jorge Schwarzer por haberme sugerido la lectura de este texto.

⁶ Véase Roberto Cortés Conde, "La salida de la convertibilidad en otras crisis argentinas", *La Nación*, 25/3/2002.

NOVEDADES

Siglo XXI Editores Argentina



PASADO Y PRESENTE
Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina
UN ANÁLISIS DE NUESTRA HISTORIA RECIENTE



LA REVOLUCIÓN DEL VOTO
Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852
COLECCIÓN HISTORIA Y CULTURA, dirigida por LUIS ALBERTO ROMERO

Lavalle 1634 11 A (C1048AAN) - Buenos Aires - Tel: 54 (11) 4373-8516 - siglox21-arg@sinctis.com.ar

Estrategia de integración monetaria con los EEUU

Dolarización: un programa político

La crisis económica que agobia hoy a la Argentina se ofrece como un campo yermo presto a ser cultivado, una vez más, con promesas de un rápido despliegue de sus potencialidades. Entre éstas, la dolarización, cuya acta de nacimiento está fechada en el año 1998 y que hoy aparece en el discurso del ex presidente Carlos Saúl Menem, de sus economistas de cabecera y de algunos sectores del *establishment* financiero, como un *deus ex machina* que no sólo garantizaría la estabilidad de un régimen cambiario, financiero y fiscal, sino que también expandiría la soberanía individual eliminando las características monopolísticas del sistema monetario argentino que han impedido la prosperidad.

Ricardo Mazzorin

La dolarización no es una simple propuesta de cambio de un régimen monetario sino un programa político. La decisión unilateral — por un acuerdo bilateral con los Estados Unidos está fuera de la agenda de esos países — de sustituir la moneda nacional por el dólar estadounidense, además de la cesión de la soberanía monetaria, implica un cambio estructural del sistema bancario, tanto público como privado, y una redefinición de los acuerdos de cooperación e integración regional en el Mercosur.

La propuesta dolarizadora supone que la Argentina puede entrar unilateralmente a formar parte de una unión monetaria con los Estados Unidos, conformando un área monetaria óptima. Los beneficios de esta integración monetaria, sostienen, le permitirán al país retornar al crecimiento económico. ¿Cuáles son los costos de una moneda común? ¿Cuáles son los beneficios de una moneda común? Éstas son las preguntas que intentaremos responder.

Los costos de una moneda común

Definiremos un área monetaria óptima como un conjunto de países vinculados por tipos de cambio irrevocablemente fijos. Identificar los criterios de optimización que harían que dos países tuvieran interés en fijar sus tipos de

cambio en forma irrevocable nos obligará a realizar una breve travesía teórica.

La movilidad de los factores de producción — capital y trabajo — es el primer criterio de optimización que propuso R. Mundell (1961) en un artículo seminal. Mundell muestra que dos países en los que los precios y los salarios no son flexibles no tendrán interés en fijar sus tipos de cambio, excepto si los factores de producción fueran lo suficientemente móviles. Para ilustrar este razonamiento analicemos, a título de ejemplo, a Francia y a España. Imaginemos que los consumidores europeos demandan, por alguna razón, cada vez menos zumos de fruta españoles y cada vez más vinos franceses. En un caso así, el precio de los vinos franceses debería aumentar, así como la actividad vitivinícola y los salarios de este sector. De manera inversa, los productores españoles, frente a una demanda decreciente, deberían reducir el precio del zumo y los salarios. Puesto que, por hipótesis, los precios y los salarios no son flexibles, en España coexistirán desempleo y déficit de balanza de cuenta corriente, mientras que en Francia se estarán generando presiones inflacionarias junto a un superávit acumulado de cuenta corriente. En este punto cabría preguntarse cómo se restaura el equilibrio económico frente a un "shock asimétrico" favorable a Francia. Dado que, bajo el efecto del shock, se esti-

mula la actividad en Francia pero se deprime en España, un desplazamiento de la mano de obra del segundo país al primero permitiría combatir la tendencia a la inflación en Francia y al desempleo en España. Podemos deducir, entonces, el criterio de optimización de Mundell: dos países no deberían fijar sus tipos de cambio en forma irrevocable a menos que la movilidad de los principales factores de la producción, entre uno y otro, sea suficientemente elevada.

El criterio de Mundell debe ser matizado a fin de tomar en cuenta, por una parte, el grado de apertura de los países considerados y, por otra, el grado de diversificación de su tejido productivo.

En el caso de países con economías altamente abiertas, en las que un gran número de bienes son transables internacionalmente, preferirán, frente a un shock macroeconómico, no depreciar su moneda para realizar el ajuste de precios relativos, ya que todo aumento del tipo de cambio se trasladaría a los precios domésticos (R. McKinnon, 1963). De ello se deduce el criterio de McKinnon: al fijar su tipo de cambio, dos economías tienen tanto menos que perder cuanto más abiertas sean entre sí.

El costo esperado de un shock asimétrico, sostiene P.B. Kenen (1969), será menor cuanto más diversificado sea el tejido productivo de los países miembros de una unión monetaria. La simetría en las estructuras productivas reduce la posibilidad de shocks que los afecten en forma diferente. Cuando un país tiene una base productiva muy diversificada, cada sector tiene un peso relativo limitado en la actividad económica. En consecuencia, un shock específico en un sector — el ejemplo de Mundell — no entrañaría más que una necesidad limitada de ajuste, evitándose la depreciación del tipo de cambio. Dos países pueden vincular sus tipos de cambio cuanto más diversificados y simétricos sean sus tejidos productivos. Éste es el criterio de Kenen.

¿Qué conclusiones provisionales podemos sacar de este viaje por el árido territorio de la economía de las áreas monetarias óptimas? Los autores hasta aquí citados sostienen que las economías pequeñas y abiertas están expuestas a shocks más grandes, lo que convierte al tipo de cambio en una herramienta de la mayor importancia. Debemos aclarar — así lo requiere la honestidad intelectual — que ninguno de estos abordajes teóricos considera los aspectos financieros de la economía, en particular el peso de las deudas en dólares, tanto del sector privado como del sector público, con todo lo que eso implica. Como es obvio, una devaluación, en una economía altamente dolarizada, conlleva un aumento en el valor nominal de las deudas y en la fragilidad financiera del sistema bancario. La Argentina postdevaluación ilustra, dramáticamente, este riesgo.

La dolarización de *jure*, propuesta por Carlos Menem y sus economistas más reconocidos, configura una estrategia de integración monetaria con los Estados Unidos. El programa recomienda promover una alta apertura de la economía y su integración en el ALCA. Dos economías que presentan fuertes asimetrías de tamaño y de diversificación de su base productiva, una pequeña y abierta, y una grande y cerrada como la de los Estados Unidos, no parecen cumplir con los requisitos que exigen los criterios de optimización de una unión monetaria. Los costos que tendría una unión monetaria con los Estados Unidos no son relevantes para el programa dolarizador, ya que como han escrito recientemente Kurt Schuler y Steve H. Hanke del Cato Institute, Washington: "(...) La falla de la teoría de las áreas monetarias óptimas es que los economistas presumen que pueden determinar los costos y beneficios para los consumidores, antes que admitir que son las evaluaciones de los consumidores las que determinan los costos y beneficios que los economistas deben considerar. Si los argentinos prefieren guardar dólares (y así lo hacen), es una indicación que, para ellos, la Argentina es parte de un área monetaria óptima con los Estados Unidos, sin importar lo que los economistas puedan pensar...". Pero qué hay de los beneficios que promete la dolarización.

Éste es el tópico de nuestra próxima escala en este viaje.

Los beneficios de una moneda común

Mientras que los costos de una moneda común están relacionados con la gestión macroeconómica de la economía, los beneficios se obtendrán principalmente en aspectos microeconómicos (P. De Grauwe, 1992). La principal ventaja de la eliminación de una moneda nacional y del paso a una moneda común proviene de las ganancias en términos de eficiencia económica. La eliminación de los costos de transacción y del riesgo de variación del tipo de cambio son las principales ventajas que pueden obtener los países que forman una unión monetaria.

Los costos de transacción son explícitos y fácilmente cuantificables, y se traducen en el pago de comisiones a los bancos que efectúan las operaciones de cambio. El paso a una moneda única elimina estos costos generando una ganancia de eficiencia económica.

El paso a una moneda común reduciría la incertidumbre cambiaria al eliminar el riesgo de cambio. Un aumento del riesgo cambiario aumentaría la tasa de interés real, afectando la información proporcionada por el mecanismo de precios. Cuando la tasa de ganancia esperada sobre los proyectos de inversión se hace más incierta, los inversores demandan una prima más elevada para compensar el aumento del riesgo. Es correcto, como sostienen los defensores de la dolarización, que la fijación irrevocable del tipo de cambio, al eliminar la incertidumbre cambiaria, provocaría una reducción de la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando se incorporan al análisis los aspectos financieros de una economía en la que tanto las empresas privadas como el sector público están altamente endeudados en dólares? En este escenario los inversores extranjeros demandarán una prima más alta para cubrir el riesgo de "default soberano", subiendo consistentemente la tasa de interés. Así, mientras por un lado la eliminación del riesgo cambiario reducirá el riesgo sistémico, de forma que los tipos de interés reales disminuirán impulsando el crecimiento económico, por otro lado el riesgo de default soberano aumentará el riesgo

sistémico frenando el crecimiento económico. La dolarización no reduce la tasa de riesgo país, como lo mostró con elocuencia la economía argentina bajo la Ley de Convertibilidad, que era una versión atenuada de un régimen de fijación irrevocable del tipo de cambio.

El programa de dolarización propuesto por Menem no parece poder cumplir con la promesa de lograr una rápida recuperación de la economía. Los costos que la Argentina pagaría integrándose unilateralmente en una unión monetaria con los Estados Unidos, serían altos aunque difíciles de calcular. ¿Cuáles son entonces los motivos que impulsan el programa de la dolarización? Hemos llegado al final de nuestro viaje.

La dolarización es un programa político

Para los defensores de la dolarización, no es el Consenso de Washington lo que ha entrado en crisis. La crisis, sostienen, tiene sus raíces, exclusivamente, en la irresponsabilidad y el populismo de las élites políticas. Se impone entonces radicalizar el paradigma.

La cesión de la soberanía monetaria que supone la dolarización convierte en ociosa la existencia del Banco Central, ya que el monopolio de la emisión de moneda fiduciaria y la administración de la política monetaria serían transferidos a la Reserva Federal de los Estados Unidos.

La reestructuración del sistema bancario involucraría dos decisiones concurrentes: la privatización del Banco Nación, que desde su creación en 1891 ha estado implicado en el financiamiento del Gobierno, por lo cual frecuentemente resultó imposible trazar una línea entre el banco y el Gobierno, y la transformación de la banca privada *on-shore* en banca *off-shore*. Estas decisiones afianzarán los derechos de propiedad (K. Schuler y S.H. Hanke, diciembre de 2001).

El programa garantizará una alianza estratégica con el capital financiero y con las empresas transnacionales que, en las condiciones de una completa dolarización de la economía, verían reducida la incertidumbre y podrían realizar sin sobresaltos sus ganancias monopolísticas. □

¿Todos contra todos?

El contrato ya está roto

"En el principio no fue el verbo, ni la acción, sino la muda presencia de la pampa; en verdad, a manera de signo premonitorio, antes estuvo poblada de vacas que de personas".¹

Lucrecia Teixidó

Somos una nación cuyo extenso territorio no es mayoritariamente pampa, donde las vacas están concentradas en una zona delimitada, y en la que sus habitantes, a excepción del lenguaje y los mitos políticos y futbolísticos y el IVA, no comparten mucho más. ¿Qué efectos han tenido la Pampa y las vacas en nuestra cultura como nación? Algo falló o el país que estaba entre los más pujantes fue perdiendo el ritmo, el aliento, confundiendo expectativas se desmoronó y siguió avanzando disimuladamente a la deriva.

Nuestra cultura política democrática fue y es, históricamente, precaria y frágil. Tiene un componente autoritario que cruza transversalmente el ámbito de lo público y lo privado. Que nuestro país sólo pueda mantener cierto equilibrio –siempre frágil– con liderazgos personales fuertes, y que las crisis recurrentes sólo remitan a "salidas" más o menos totalitarias, so pena de que las instituciones terminen descuartizadas como Tupac Amaru, es en sí mismo una muestra de desarrollo defectuoso y perturbado.

Leandro Gutiérrez y Luis A. Romero sostienen: "A principios de siglo, la ciudadanía no surgió tanto de las demandas de la sociedad como de la acción del Estado. Los sectores populares en constitución –pese a la prédica socialista– no establecieron una relación directa y clara entre el ejercicio del voto y la mejora de sus condiciones: aunque la práctica política, a través del comité, podía constituir una de las muchas vías de ascenso social, éste no era en modo alguno el resultado del ejercicio del sufragio".²

Golpes militares, gobiernos civiles más o menos débiles, más de 1500 muertos por la Triple A en el gobierno justicialista, más golpes militares con secuestros y desapariciones, juicios a los genocidas e indultos a los mismos

genocidas, un Estado empresarial y prebendario, déficit fiscal crónico, inflaciones e hiperinflaciones, un Estado privatizado y endeudado, Convertibilidad a rajatabla durante diez años. Demasiada esquizofrenia y durante demasiado tiempo, como para no afectar los valores, hábitos, creencias y expectativas (generalmente sobredimensionadas) que constituyeron el entramado social.

Nuestra identidad (si alguna vez la tuvimos) fue deshilachándose de manera lenta y continua, y con una facilidad que por momentos nos deja perplejos. ¿Qué tipo de ciudadanía se considera el argentino de clase media y alta que evade impuestos con el argumento (que deviene banal excusa para no pagarlos) de que el Estado mal usa y malversa lo recaudado? Tal vez se considere una versión agotada de "ciudadano del mundo", por lo cual está exento de pagar impuestos en el lugar que reside.

¿Qué entienden por contrato social, por sociedad, por Estado? Porque mientras la economía les permitía defender su propiedad (mueble, inmueble, acciones, plazos fijos, etcétera) miraron con ajena desprovista de cierta no-

lestita la invasión creciente de pobres y desarrapados durante más de diez años.

¿Qué concepto de la política y la ética habrá predominado entre todos aquellos que durante la década menemista y mientras la Convertibilidad protegía sus vidas y proyectos, no se indignaron ante los miles y miles de pobres con *pedigree* de varias generaciones y ante los nuevos pobres que crecían sin cesar?

¿Por qué fue que los argentinos, tan inteligentes y perspicaces, creíamos a pie juntillas (o hicimos "como que") que un peso era igual a un dólar, hasta el punto de ni siquiera sospechar (¿o tal vez sí pero apostábamos a la suerte?) que tasas de interés del 18 por ciento para nuestros depósitos eran un alerta advertido sólo por los de afuera?

A los que tienen hambre, vergüenza o resentimiento por no poder llevar comida y seguridad a sus hogares, a los que cada día son más brutos, más ignorantes, más enfermos, más débiles, a los que cada día se suman al ejército de hurgadores de basura, a los que tienen la certeza de que no podrán salir de su condición de pobres ni ellos ni sus descendientes, a todos ellos y a muchos

más cuyas biografías insidiosamente particulares no podría abarcar ni la mejor enumeración, el Estado, los partidos políticos, las instituciones de la democracia les importan cada vez menos.

Qué otra reacción podríamos esperar, si durante una década y mientras la calidad de vida de la mayoría de los argentinos empeoraba, muchos economistas y políticos, los gobiernos y los organismos internacionales consideraron intocable la Convertibilidad, o actuaron de manera oportunista para no perder los favores de una amplia clase media y alta embelesada por los beneficios mágicos del uno a uno.

Por lo tanto, estos millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños (que deberían ser el futuro de una sociedad) no constituyen un terreno fértil para hablar de ciudadanía fiscal, de contrato social, de la política como articuladora de intereses, de la democracia como cultura. Si constituyen un terreno abonado de desesperanza, resentimiento, bronca y dolor para las salidas autoritarias, populistas y clientelares.

Las sociedades han pasado y seguirán pasando por etapas de desprecio y vituperación de la política, muchas veces porque los políticos quedaron desarbolados y no lograron adaptarse e interpretar las necesidades de su tiempo.

Nuestro contrato como sociedad, ese contrato implícito y explícito que da sentido al pasado y hace posibles el presente y el futuro, se rompió hace tiempo. Sindicalistas, empresarios industriales, ganaderos y banqueros, economistas y políticos (especialmente estos últimos, por ser los responsables de articular intereses y demandas en función de proyectos de poder) no tuvieron capacidad ni voluntad de prever, de anticiparse a las crisis, quedaron atrapados por sus intereses corporativos e inmediatistas. Nuestros partidos políticos han ido perdiendo los reflejos hace tiempo y cada día se les hace más difícil pensar y actuar articulando los plazos corto, mediano y largo. ¿Cómo pretender, entonces, políticas sustentables, políticas de Estado?

Nadie se propuso mirar y pensar para el largo plazo. El resultado fue que nuestra versión autóctona del Estado de Bienestar tomó cuerpo con vicios estructurales que se agravaron con el tiempo. Y la ciudadanía que creció y se

desarrolló a su amparo, fue igualmente deformada, viciada, prebendaria. La política se retrorajó, incapaz de construir horizontes de futuro compartidos, y el terreno perdido por la actividad política fue ganado por la actividad política que los intereses corporativos. En ese contexto es muy difícil reconocer legitimidad a la negociación, la concesión, el consenso, el compromiso y el respeto a los acuerdos.

Como afirmó recientemente Carmelo Angulo Barturen, uno de los integrantes de la Mesa de Diálogo Argentino: "En una mesa de paz en Colombia se sentarían unos cinco o seis personas, de los distintos sectores en conflicto; en la Argentina tendrían que ser cientos".

Todos sabemos que democracia y gobierno democrático no son lo mismo. La primera refiere a un sistema de normas para la organización, elección, remoción y legitimación del poder político; el segundo, por el contrario, remite a la compleja gama de equilibrios, configuraciones organizativas, restricciones y modelos de actividad para decidir políticas. Estas configuraciones y modelos influyen en la cultura política, en la agenda de problemas, en la estructuración de grupos, etcétera.

Pero hoy, como sostiene el obispo de Santiago del Estero, monseñor MacCarrone, "La sensación es que no hay clases, grupos o sectores enfrentados, sino que estamos todos contra todos".

En el *mare magnum* que fue y es nuestra vida institucional, la relación que se construyó entre la ciudadanía y el Estado fue de amor y de odio. Demandas permanentes de servicios, empleo, beneficios y, simultáneamente, una relación creciente de los mecanismos de control horizontales y verticales, conjuntamente con una pertinaz indiferencia ciudadana acerca de cómo hace el Estado para cumplir con los múltiples compromisos sectoriales, corporativos, políticos.

En realidad, la pregunta del millón es: ¿cómo fue que nuestro Estado, con sus instituciones manoseadas repetidamente, su burocracia decadente en su calidad profesional por el clientelismo crónico, la laxitud en el cumplimiento de sus leyes, sus símbolos abusados por sucesivos golpes militares y usados muchas veces de modo oportunista por los civiles, sus normas formales e informales

transgredidas desde arriba y desde abajo; debilitado por demandas contrapuestas, recaudación decreciente, ineficiencia institucional; decaracterizado por la consolidación de cotos de caza por parte de sindicatos, empresas, empleados... ¿Cómo pudo ese Estado agonizar durante tanto, tanto tiempo, y cumplir más mal que bien, sus compromisos con la sociedad interna y la internacional?

Excepto los pobres, que por falta de presión tuvieron que resignar y siguen resignando salud, educación, esperanzas, trabajo, calidad de vida; excepto esa masa sin nombres ni biografías, nadie quiere resignar nada, empujando por los que más ganaron.

Entre la desesperanza y la bronca de los de abajo y la obtusa creencia de los de arriba en que pueden sobrevivir excluyendo a dos tercios de la sociedad, la política se informaliza, desborda hacia otros ámbitos... y lo riesgoso no es que se desborde, sino que lo haga travestida y con las banderas de la antipolítica.

¿Podrán los partidos políticos, los tradicionales y los "no tanto", modificar prácticas y general propuestas para hacer más inteligible la realidad, para mejorar la calidad de vida de las personas y recuperar la capacidad de articular intereses y expectativas? No es una tarea fácil de encarar cuando se produce un desmoronamiento de la política y por tanto se restringe su margen de acción.

El desafío es grande e ineludible. De otro modo, a los argentinos nos puede suceder lo que relata el personaje de Juan José Saer: "La de la luz o la del sonido no son nada al lado de la barrera de la identidad. Nos fuimos poniendo cada vez más borrosos, hasta que desaparecimos del todo. Pensamos que la cosa iba a detenerse en un punto razonable, pero no...".³ □

Notas

¹ Norberto Rodríguez Bustamante, "La cultura", en *La Argentina posible*, Universidad de Belgrano, 1976, Buenos Aires.

² Leandro H. Gutiérrez y Luis A. Romero, *Sectores populares. Cultura y política*, Buenos Aires en la entreguerra, Editorial Sudamericana, 1995, Buenos Aires, p. 170.

³ Theda S. Skocpol, "El Estado regresa a primer plano", en *Zona Abierta*, enero-marzo, 1989.

⁴ Norbert Lechner, *Leviatán* N° 63.
⁵ Juan José Saer, *La mayor*, Seix Barral, 1998, Buenos Aires.



Favela en el cerro (1924)

Un fracaso tan rotundo como el del comunismo real

El capitalismo real

Si en 1988 un analista político hubiera afirmado que el comunismo estaba al borde de la desaparición y que la segunda potencia mundial, la Unión Soviética, desaparecería de un plumazo, sus repúblicas anexas se independizarían, se restablecería la propiedad privada y se impondría el libre mercado; si en ese entonces alguien se hubiera atrevido a afirmar que los *McDonald's* invadirían las calles de Moscú y San Petersburgo, junto con *Versace* y *Pierre Cardin*, la gente lo habría mirado con cierta condescendencia, como se mira al pastor que sube al escenario y pronostica grandes catástrofes y el fin de la Humanidad en los próximos meses.

Sergio Bufano

Cómo se medía el fracaso del socialismo como propuesta social, económica y también ética a nivel mundial? El *gueto* del hambre, la represión cultural, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción de las élites gobernantes, eran los *parámetros* que, con razón, cuestionaban un modelo que había pretendido el fin de la injinicia social.

Según el Banco Mundial, prescindiendo de China, 54 por ciento de la población mundial vive hoy con menos de dos dólares por día, y 22 por ciento está situado por debajo del nivel de pobreza absoluta, con menos de un dólar diario. La promesa de que el crecimiento y la generación de riqueza serían el arma principal en la lucha contra la miseria ha quedado desmentida por la realidad: la brecha entre ricos y pobres en los últimos veinte años se ha ampliado a tal extremo que resulta escandaloso y cuestiona las bases éticas sobre las que se configuró el ideario del capitalismo liberal. Ya no hay crecimiento en los países pobres y la equidad está cada día más lejana.

Este proceso de degradación plantea dos cuestiones: hasta cuándo aguantarán los expulsados del sistema sin recurrir a la violencia y, además, si existe un modelo que pueda sustituir al capitalismo.

La izquierda abandonó hace muchos años la bandera del socialismo. Las experiencias del socialismo real, pri-

mero, y su derrumbe, después, desalentaron toda iniciativa de búsqueda de un modelo que recuperara los principios de igualdad sin menoscabo de las libertades civiles. Esa bandera fue regalada a grupos no representativos, minoritarios y sobre todo poco serios que se mueven en los extramuros de la política real. La derrota del ideario socialista fue seguida por un escepticismo que, en muchos casos, se convirtió en el peor de los estados del pensamiento: el cinismo, expresado en el abandono de toda búsqueda y en el descubrimiento de ciertas bondades que otorgan los países capitalistas centrales: becas, premios, viajes, honores. El proyecto de un mundo mejor quedó en el desván junto con las obras completas de los clásicos marxistas.



Estudio de desnudo (1923)

Pero la historia no tuvo fin y el mundo siguió avanzando en un proceso escandaloso de sometimiento de continentes, de naciones, de ciudadanos de esas naciones, y de los que todavía no han nacido pero que ya están condenados a morir poco tiempo después del alumbramiento. Si resultaba difícil explicar al campesino ruso, cuyos hijos morían de hambre y cuyos vecinos habían sido confinados en un campo de concentración, que ése era el precio por construir un mundo feliz, no es menos difícil convencer al miserable que vive en un barril y que también se muere de hambre, de que el capitalismo es el único modelo y de que, cuando haya riqueza, se producirá el tan ansiado "derrame". El actual capitalismo es muy parecido al socialismo real: promete un futuro venturoso en un presente de hambre e inequidad. Porque este capitalismo es, al pensamiento de sus fundadores, lo que el stalinismo al comunismo imaginado por Marx. Y el problema es que no hay voces autorizadas que se atrevan a cuestionar este sistema que degrada la condición humana. Se critican las consecuencias del sistema, pero no el sistema, que ha sido totalmente desvirtuado en su filosofía de origen.

El modelo norteamericano

Estados Unidos viola una de las reglas básicas del libre mercado, la sana competencia comercial, cuando aumenta en ochenta por ciento los subsidios para sus ineficientes granjeros. También viola los derechos humanos cuando se opone a la creación de la Corte Penal Internacional que juzgará a los criminales de guerra. No sólo se opone sino que amenaza con represalias que podrían llegar a la invasión de La Haya si alguno de sus compatriotas fuera juzgado por el tribunal. Las bombas que ha dejado caer sobre la población civil en Afganistán han matado a miles de personas tan inocentes como los oficinistas de las Torres Gemelas. Y hoy prepara una invasión masiva a Irak, que bien puede representar un

genocidio más que se sumará a los ya cometidos.

Viola los derechos humanos cuando autoriza a sus agentes a realizar "ejecuciones extrajudiciales", un eufemismo para disfrazar la palabra asesinato, y viola los más elementales derechos soberanos de las naciones cuando interviene a través de los mercados para derribar a candidatos presidenciales que no le garantizan sus políticas intervencionistas. Las acciones armadas se han convertido en moneda corriente y el mundo las acepta sumisamente: los Balcanes, Panamá, Granada, Angola, Mozambique y Nicaragua dan cuenta de que si Estados Unidos ya era una nación belicista que no se detenía en su afán conquistador a pesar de la existencia de la Unión Soviética, la desaparición de ésta ha multiplicado su potencial intervencionista violatorio del Derecho internacional.

El ataque a un país sin justificación, ya que no fue la nación de Afganistán la autora del atentado del 11 de septiembre, el genocidio provocado por miles de toneladas de bombas sobre población civil, la violación de la Convención de Ginebra en cuanto al trato de prisioneros de guerra en Guantánamo, la amenaza de derribar a presidentes que no le gustan; todo ello conforma un nuevo escenario: el de democracias aparentes, soberanías aparentes, derechos humanos aparentes. En definitiva, un "como si" de algo que ya no es. Que dejó de serlo tiempo atrás y que cada día acrecienta una ilegalidad que, por su rutina, se convierte en norma.

Cuando el embajador de los Estados Unidos amenaza a Bolivia ante la posibilidad de que el líder campesino Evo Morales llegue a la presidencia, cuando "los mercados" amenazan a Brasil por la posibilidad de que Lula acceda a la primera magistratura y cuando algunos republicanos proponen incluirlo dentro de la clasificación de los líderes del "eje del mal"; cuando eso ocurre es porque, "de este lado", nadie levanta la voz para denunciar esa prepotencia militarista con la energía que se requiere. La categoría "de este lado" no tiene, naturalmente, rigor académico, pero intenta ubicar en un sitio imaginario al amplio marco de los que no aprueban—aunque permanezcan en silencio—la intención

hegemónica de los Estados Unidos. ¿Cómo construir algo "de este lado" que pueda sobreponerse a la formidable derrota de una propuesta que intentaba alcanzar un mundo mejor? Como las opciones socialistas aplicadas devinieron en dictaduras que negaban la esencia del socialismo, todas las ideas que sustentaron el proyecto quedaron invalidadas y fueron arrojadas por la ventana, incluyendo al niño. Y se creyó que mediante artilugios lingüísticos podría transformarse la realidad: la izquierda pasó a denominarse progresismo, las naciones del Tercer Mundo ahora son países emergentes, el imperialismo ahora es imperio, las clases sociales son multitudes. Si no logramos transformar el mundo, cambiemos las categorías, que es mucho más fácil.

Pero la realidad es la misma: menos democracia liberal, más militarismo, más imperialismo expansionista, más violaciones a los derechos humanos, más miseria y explotación de los trabajadores en las naciones que jamás deja-

ron de ser del Tercer Mundo. El lenguaje vergonzante nunca podrá modificar un escenario cada día más cruel.

En las antipodas

El "capitalismo real" está fracasando, como fracasó el comunismo real. Si este último fue antipoda del proyecto imaginado en el *Manifiesto* de 1848, el capitalismo también es antipoda del soñado por los liberales del mismo siglo.

Y datos no faltan. 1. El discurso único impuesto por medios de comunicación masivos que penetran fronteras en todo el mundo es cada día más antidemocrático. 2. El lavado de dinero ilícito en los grandes bancos de los Estados Unidos ha sido calculado, por un subcomité del Senado de Washington, entre 250 y 500 mil millones de dólares anuales, lo que brinda una idea aproximada del nivel de corrupción, que se patentiza todavía más con los casos de *Enron*, *IBM* y *WorldCom*, por nombrar únicamente



Libros del Zorzal



Silvia Bleichmar *Dolor País*

La autora, prestigiosa psicoanalista, se introduce en las causas que provocaron el estallido social y la caída de Fernando De la Rúa y examina los distintos componentes de una sociedad en crisis.



Noam Chomsky *El terror como política exterior de Estados Unidos*

Tres textos del célebre pensador acerca de la actitud estadounidense respecto al resto del mundo con un denominador común: las prácticas terroristas. El libro incluye un análisis del ataque del pasado 11 de septiembre.



Immanuel Wallerstein *Un mundo incierto*

El prestigioso investigador de la Universidad de Yale expone un punzante análisis de la compleja realidad contemporánea de último momento sin perder de vista una perspectiva de larga duración.



Pierre Bourdieu *Pensamiento y acción*

¿Cómo resistir contra el tipo de globalización conservadora que se nos quiere imponer? A través de sus intervenciones públicas de los últimos años, el célebre sociólogo francés nos ofrece ejemplos invaluables de participación.

Libros del Zorzal: 25 de mayo 583 piso 10*12 / 4314-3834 / info@delzorzal.com.ar

los más destacados. Más de 4500 empleados de Enron quedaron en la calle luego de que 144 directivos de la compañía se llevaran a sus casas 750 millones de dólares el año pasado. 3. El retorno a modelos de esclavitud en países asiáticos a manos de empresas norteamericanas que, con la excusa de buscar mano de obra barata, someten a los trabajadores a condiciones inhumanas de vida. 4. Las ya mencionadas "ejecuciones extrajudiciales", violatorias de los más elementales derechos individuales. 5. La vulneración de acuerdos internacionales, como es el caso de Kyoto, con el nuevo programa de misiles. Estos son algunos ejemplos aislados que exponen una política imperialista de EEUU que condiciona a las democracias de muchos países del mundo, a su vez corrompidas, indiferentes al destino de los hombres y cada vez más distantes de un verdadero Estado de Derecho.

¿Alguien podría arriesgarse hoy a afirmar que la democracia liberal, tal como la concibieron sus fundadores en el siglo XIX, ha sucumbido definitivamente? Repetimos: ¿definitivamente? La razón indica que no, el mismo sentido que le otorgamos a la vida indica que no. Pero habría que esconder la cabeza en el mismo agujero que el avestruz para no advertir que el capitalismo ha creado una réplica del monstruo que siempre le criticó a la corrompida Unión Soviética: el Gulag. Un gulag cien mil veces más gigantesco y cruel que el diseñado por el stalinismo recorre el mundo, ya no como fantasma, sino como una realidad que debería avergonzar al más reaccionario y primitivo de los hombres.

El gran Gulag del "capitalismo real" ha entrado en colisión con los valores morales y éticos que decía defender. El pluralismo, la tolerancia, las libertades públicas, el respeto a la ley conforman un universo simbólico que, si desaparece, empuja a las sociedades a tierra de nadie.

Una cultura de izquierda que rescate esos valores y los oponga a este mundo falsamente democrático, es posible. Para ello habrá que vencer la incertidumbre que provoca el fracaso de los dos grandes modelos que se enfrentaron para producir, al fin y al cabo, un mismo y triste resultado. □

El socialismo: una casa siempre abierta y en permanente construcción

¿Cómo avanzar hacia un orden fundado en una sociedad justa? La experiencia demuestra que eso sólo será posible con un proyecto promovido y ejecutado por una coalición donde la izquierda democrática -el socialismo- desempeñe un rol central, como garante de la reconstrucción de un país en ruinas.

Jorge Tula

No creo exagerar si afirmo que el nuevo milenio nos encuentra a todos, a la sociedad en su conjunto y al mundo de la política en particular, por un lado invadidos por la estupefacción, y por el otro, en una situación paradójica. Nos encontramos estupefactos porque asistimos a un momento singular de la marcha de la Humanidad, porque nos toca vivir y somos espectadores-actores de un proceso de cambios que se realiza con una gran intensidad y velocidad que modifiquen la realidad de una forma tan profunda como tal vez nunca antes había sucedido.

Acercar de todo ello, conviene destacar dos fenómenos de gran importancia.

El primero de ellos, el fenómeno de la globalización, que tiene como rasgo distintivo general la ausencia de límites y que se manifiesta territorialmente en la perforación de cualquier frontera. Ausencia de límites que exhiben más que nadie la tecnología, la ciencia; en realidad, son precisamente ellas el límite. Y el límite es aquel punto al que se llega con la investigación y con aplicaciones científico-tecnológicas, pero para ir más allá. Dicho de otra manera: el límite sólo lo establece la técnica, que se cree en condiciones de resolver todo. "Energía pura sin motivación", dice Cacciari, ella aparece como la única fuente de respuesta y se ha convertido en la verdadera religión de estos días.

La primacía indiscutible de la técnica, que aparece ante los ojos de todos como un organismo que se regula a sí mismo, ha generado, por cierto, la convicción de que también puede ser científica-

mente tratado todo aquello que regula la sociedad, de que ahora todo puede ser gobernado por mecanismos, por automatismos que regulan los distintos aspectos de nuestra vida. Y los automatismos técnicos y burocrático-institucionales rechazan por cierto las disputas, el conflicto insidioso y entorpecedor que acompañaría necesariamente a la democracia. Ahora bien, esta idea de confiar el futuro a la técnica es la exhumación del gran proyecto político de despolitización del mundo, es decir, de la reducción del espacio de la política y de la participación, y de la ausencia de cualquier tipo de control ciudadano.

En esta fase de primacía de la técnica, la globalización se manifiesta de diversas maneras. A los efectos de nuestras argumentaciones, mencionaremos algunas de ellas.

- La mundialización financiera, es decir, los movimientos de capital especulativo que circulan libremente por el mundo y que generan efectos devastadores -como sucedió en nuestro país-, entre los que podemos mencionar la evasión fiscal, el incremento de las finanzas en negro y de las que provienen de las actividades ilegales, y la creación de los paraísos fiscales.
- Las transformaciones científico-tecnológicas no sólo han modificado el sistema de producción, sino que, además, han generado una subordinación de nuevo tipo que deja en la indefensión total al individuo, quien ha sido convencido de que en su trabajo puede ser reemplazado sin inconveniente alguno porque se trata de una tarea para la que posee cada día menos contenidos cognitivos.
- Abolidas las fronteras, se ingresa en una crisis y, si es cierto lo que algunos

sostienen, acaso en el último período de la existencia del Estado-nación. Sucede que ahora muchas de las decisiones políticas que afectan a sus habitantes ya no se toman en el ámbito nacional, y por tanto, su soberanía va sufriendo recortes que no se sabe hasta dónde llegarán.

Éstos son sólo algunos de los elementos que quisimos destacar de un fenómeno mucho más amplio, que permite decir que hemos ingresado en una nueva época, en una nueva era, de una entidad similar a la que tuvieron, por ejemplo, la Edad Media o la Edad Moderna. Pero, a diferencia de estos dos períodos históricos, ahora estaríamos inmersos en una época que pone en cuestión el concepto mismo de historia tal como lo hemos entendido y utilizado hasta ahora, e ingresaríamos en una dimensión histórica totalmente nueva, horizontal, con alteraciones en los ritmos, y en la que la simultaneidad de los eventos alteraría el orden de sucesión entre el antes y el después. Se trataría, entonces, de un fenómeno que va más allá de un mero cambio de época. Dicho de otra manera: habríamos ingresado en un régimen de destino distinto.

Si esto fuera realmente así, estaríamos en presencia de un proceso integral, en el que cada punto del mundo estaría conectado en tiempo real con otro. Pero, por otro lado, a la vez no es posible imaginar ningún punto externo al mundo. Pues bien, ésta es la forma que ha asumido el mundo. Además, esta globalización, o modernidad-mundo, como se la quiera llamar, parece ser un proceso irreversible.

Este proceso de globalización, entonces, no ofrecería posibilidad alguna de salir, puesto que la globalización no es algo interno a lo que se pueda contraponer otra cosa que sea algo externo. Más aun, se trata precisamente de la cancelación de lo interno y de lo externo. Ni siquiera el centro de la globalización está en condiciones de eludir la relación global con los otros espacios que integran el mundo.

Sin embargo, en este planeta que se presenta más unificado que nunca, se manifiestan de manera inculcable, fracturas y divisiones de gran profundidad.

En ciertos lugares del mundo, esto es, en las zonas en donde se ha producido un gran desarrollo científico, tecnológico y económico, están aprovechando

los beneficios que acompañan al proceso globalizador. En otras zonas, a las que alguna vez se las designó como el Sur del mundo, existe una cantidad inmensurable de personas que viven en condiciones cercanas a la esclavitud: allí reinan la explotación, la pobreza y el sufrimiento, como si el recorrido del tiempo se hubiera detenido en esas fronteras que la globalización no ha abolido para lograr plenitud y permitir que todos aprovechen las oportunidades que, según se afirma, ofrece.

En este sentido, la globalización es inclusiva y exclusiva. El grado de exclusión lo muestra el hecho de que los diez hombres más ricos del mundo tienen mayor ingreso que los diez países más pobres. ¿Tanta desproporción entre pobreza y riqueza en un mundo que, por el avance de la ciencia y de la técnica, tiene más posibilidades que nunca de erradicar el hambre y la miseria y, en consecuencia, generar condiciones para una vida digna? Ésta es la situación paradójica a la que nos referíamos al comienzo.

Tal desproporción está mostrando que vivimos en un escenario mundial que carece de sentido y que, a la vez, es generador de violencia y de otras

reacciones más propias de la insensatez que de la inteligencia política. El "Doctor Insólito" comanda con la afluencia, y acaso con la complacencia de la elite que gobierna el mundo, una cruzada con el signo inculcable de la brutalidad y del cercenamiento de derechos elementales; y dirigentes que se reclaman progresistas transitan imperturbablemente por los países agobiados por la deuda externa defendiendo los intereses de empresas privadas o estatales de las zonas donde ellos viven, enriquecidos con ganancias impúdicas que en sus respectivos países no pueden lograr; y a la vez, lo hacen convencidos de que están defendiendo los intereses nacionales sin ocultar su indiferencia ante la suerte de los países que generan la riqueza llevada en gran parte a otro lado, a costa del empobrecimiento de los países que han sido invadidos por los capitales financieros internacionales, para los que no se establecen reglas.

Estamos pues ante la aparición de lo que alguien ha designado como "clase global". Y es precisamente ella la que observa con indiferencia el incremento de las desigualdades y la que genera una laceración de la tradicional solidaridad



El mamón (1925)

social. La creación de nuevas desigualdades, como es sabido, es una característica de todo desarrollo capitalista. Así ha sucedido, por ejemplo, durante los inicios de la sociedad industrial. Pero es posible advertir una diferencia: en aquella época, los pobres, en tanto fuerza de trabajo, eran necesarios para los capitalistas de entonces; ahora, por el contrario, los pobres de hoy no son necesarios para la "clase global".

Es precisamente en estos momentos de estupefacción cuando hay que esforzarse para encontrar formas de reinvindicar la política. Sin embargo, ella debe ser repensada, recreada, para poder estar en condiciones de entender las transformaciones inéditas de este momento de la marcha del mundo, en el que un sector considerable de la población se siente cómodo y adhiere al discurso de la despolitización que acompaña al proceso de globalización, pero en el que también están presentes otros sujetos, viejos y nuevos, que miran con otra actitud esta época, que se sienten atraídos por distintas formas en que se manifiesta la innovación, que de una manera u otra quieren participar en este proceso y que reclaman teoría. Abandonar el cómodo e improductivo espacio en el que se la había confinado o al que había sido reclusa, generar nuevas relaciones con los ciudadanos, recrear las instituciones que nos han acompañado hasta ahora y crear otras nuevas; mirar con atención y desprecio las nuevas formas organizativas que se puedan ir gestando por el esfuerzo y la iniciativa de algunas expresiones de la política institucionalizada o por la imaginación de distintas franjas de la sociedad civil: todo esto debería ser la tarea de la política en esta nueva fase.

La política tiene necesidad de fuerzas, de formas, de decisiones, cada vez de más decisiones. Y las sociedades de cualquier parte del mundo tienen necesidad de instituciones, de una dosis mayor o menor de orden, de sociabilidad. La pura subjetividad que desprecie cualquier cauce, a pesar de la importancia que tiene, corre el riesgo de desembocar en alguna forma de manifestación de la antipolítica. Pero la antipolítica también es abonada por las dificultades que tienen los partidos para dar sentido a la acción política y por las nuevas formas de oligarquización que se desa-

rollan en su seno, a través de la creciente tendencia a la profesionalización de la política, que consigue expulsar a quienes se sienten atraídos por ésta y que se ven obligados a buscar otros espacios para poder dar forma a los persistentes deseos de expresar en los hechos los sentimientos de fraternidad que, a pesar de todo, aún persisten.

La política es proyecto, proyecto que se diseña y que es ejecutado por organizaciones. Y la razón de proyecto es la conveniencia o necesidad de vincular la política a una visión de la sociedad. En el caso nuestro, es decir, de los socialistas, a una sociedad mejor, desde el punto de vista de nuestros valores de libertad, igualdad y solidaridad.

El desinterés por la política se debe a varias cosas, entre las que no falta, por cierto, la ausencia de aquella visión. El derrumbe de las ideologías ha afectado también las ideas y los ideales. Por eso la política sólo muestra pobreza, recorridos circulares, carencia de dirección. La visión de una sociedad mejor y el anhelo de llegar a ella mediante la ardua búsqueda de un camino adecuado, no significan abandonarnos a la creencia de que existe un destino al que no podemos eludir y del que no podemos prescindir, y que nos conduce a una sociedad que nada tiene que ver con los valores anteriormente expuestos.

La diferencia entre utopía y proyecto la expresa mejor que nadie una metáfora de Bertrand de Jouvenel. La utopía es un destino que nos aguarda y nos sobrepasa, y respecto de la cual existe la disposición de dejarse conducir. El proyecto, en cambio, es una cuerda que tiramos adelante y hacia lo alto, como lo hace el alpinista para poder escalar en un recorrido riesgoso, incierto y accidentado. El proyecto no es un destino sino un instrumento. Pero un instrumento de gran importancia, porque permite incidir con inteligencia sobre la realidad y evita los riesgos del extravío. La idea de proyecto forma parte de nuestra concepción socialista de la política.

Al contrario de las orientaciones políticas de derecha, que confían la regulación de la sociedad a las relaciones de fuerza que se manifiestan en el mercado, la izquierda democrática, es decir el socialismo, acepta al mercado

como organizador de la economía pero incorpora moderadores éticos, sociales y jurídicos para impedir los excesos que el mercado necesariamente genera cuando no se introducen reglas externas al juego.

Hoy, la mundialización de los mercados obliga a la búsqueda de nuevos niveles y formas de equilibrio. Si en los espacios nacionales se requiere un Estado que garantice la competitividad, pero que también esté obligado a mantener en la esfera pública la responsabilidad de las grandes regulaciones, es decir, la regulación macroeconómica, la regulación ambiental y la regulación de los límites éticos de la tecnología, y a la vez reconocer a la política la responsabilidad de la cohesión social y la tarea de proveer de bienes colectivos; pues bien, en los espacios supranacionales se necesita crear las instituciones existentes y crear otras nuevas que respeten criterios de funcionamiento democráticos, y que pongan límites a los desbordes del mercado y a la avidez del capital improductivo. Esto también está registrado en la agenda de las decisiones políticas de los socialistas.

Si esta nueva etapa del desarrollo está produciendo, una vez más, ganadores y perdedores, y a la vez se está generando una división social acaso más profunda que antes, la búsqueda de acortamiento de las distancias no puede ser dejada a la política de los buenos sentimientos, como dice Fitoussi, sino a los mecanismos institucionales de compensación que permitan distribuir trabajo y réditos reales sobre la base del principio de ciudadanía, que reconoce a mujeres y hombres derechos sociales universales. Se trata, éste, de un principio que el socialismo debe reafirmar, porque constituye algo distintivo de la izquierda democrática.

Si nos hemos referido con insistencia a la globalización es porque creemos que en este horizonte debe pensarse la política, y cualquier iniciativa, desde una mirada socialista de ella. La globalización no puede orientarse a abolir las diferencias ni dirigirse sino más hacia la homologación, pues ello puede conducir a un conflicto civil. Por el contrario, debe ser la búsqueda de cohesión entre distintos, bajo la forma política en ese criterio organizativo que

es el federalismo. La izquierda democrática, el socialismo, debería ser más global que quienes aparecen como sus abanderados. Sin embargo, debe hacer uso del pensamiento crítico para cuestionar el formato que va adquiriendo, plantear cuestiones nuevas, mostrar sus contradicciones y encontrar a sus sujetos que puedan estar en condiciones de representarlo. La política debe ser inteligente, responsable y a la vez audaz para desafiar a la "clase global" y hacer cumplir sus promesas de un desarrollo que genere bienestar, justicia y oportunidad para todos. En esta dirección nos encaminamos los socialistas.

De manera opuesta a lo que hicieron otros países, la Argentina ingresó sin recaudo alguno en el proceso de globalización. La ineptitud de su clase dirigente la llevó a la aceptación acrítica de todos los ingredientes del pensamiento único, que se pueden resumir así: privatización extrema de las actividades económicas, flexibilidad ilimitada de los mercados, puertas abiertas para el capital especulativo,

aceptación entusiasta de la economía apolítica. Las consecuencias las tenemos a la vista: incremento de la desocupación, deterioro de la educación y de la salud, destrucción de la industria nacional, erosión extrema de los lazos sociales.

Ingresamos pues en el primer siglo del nuevo milenio llevando en nuestras espaldas el inmenso peso de una crisis desconocida. El país que con orgullo exhibía el proyecto sarmentino de educación pública, que posibilitó la integración social y que nos preparó para la ciudadanía, que construyó un Estado social que a pesar de sus déficit promovió nuevos derechos, que alcanzó cierta dosis de igualdad como ningún otro país de esta parte del mundo, que fue capaz de generar una gran movilidad social, que esbozó un proyecto nacional e inició un proceso de desarrollo; la Argentina que fue capaz de todo esto ya no existe más. Fue destruida por el proceso de modernización salvaje desplegado en la última década del siglo pasado y que consiguió derribar los

cimientos que sostenían a la Argentina moderna.

Nos enfrentamos, entonces, a un gran desafío: reconstruir el país. Para ello, debemos exhumar la idea de proyecto y diseñar un proyecto nacional, que indicará caminos para insertarnos en el mundo globalizado, de manera tal de aprovechar las oportunidades que ofrece y eludir en adelante los riesgos que ya conocemos.

Nada de eso será posible sin la recreación y la profundización del Mercosur. Si el escenario del sur del continente se modifica, esta meta podrá ser alcanzada. Pero, además, debemos avanzar en la construcción de otros bloques con los países que también conocen los efectos nocivos de la globalización, a los efectos de bragar por una regulación concertada de los movimientos de capital, erradicar los paraísos fiscales y lograr inversiones que generen trabajo.

En esta plataforma ideal que debe orientar al gobierno de nuestra sociedad, tendremos que reelaborar la idea de un

El gobierno chileno condecoró a Juan Carlos Portantiero

El Embajador de Chile en la Argentina, Jorge Arrate Mac Niven, impulsó al codirector de *La Ciudad Futura*, Juan Carlos Portantiero, los atributos de la Condecoración Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Oficial, distinción que le fue otorgada recientemente por el gobierno de aquel país en mérito a la permanente amistad demostrada hacia el pueblo chileno. En la ceremonia, el

Embajador Arrate Mac Niven se refirió a los tradicionales vínculos de confraternidad que unen a intelectuales de ambos países, resaltando la destacada trayectoria profesional y moral de Portantiero. El acto se llevó a cabo el 28 de agosto de 2002 en la sede diplomática de Tagle y Avenida Libertador, con la presencia de un amplio núcleo de amigos, colegas y allegados del homenajeado.



FOTO: GILBERTO JARA



"Estado nacional", que sea económica, monetaria y políticamente soberano. Sin este Estado fuerte e inteligente que se proponga la regulación social del mercado, no es posible garantizar el crecimiento económico, y menos un crecimiento estable. Esto lo sabemos bien.

Para este proyecto, el gasto público y el consumo interno son fundamentales. No se puede crecer sólo mediante el mantenimiento de mercados exteriores, ni se pueden incrementar las exportaciones sin una política productiva. Tampoco es posible efectuar un gasto público de manera responsable e inteligente sin capacidad recaudatoria y políticas tributarias progresivas. Se trata pues de rediseñar un nuevo modelo social que tenga como norte la construcción de una ciudadanía social mediante políticas universales de ingreso ciudadano. En esta línea, el seguro de empleo y formación, promovido por el Frenap, que pretende atenuar la indignante exclusión social, puede constituir un buen antecedente.

Una propuesta de esta índole no se propone enfrentar las consecuencias, sino las causas de los desequilibrios que genera la forma que ha adquirido el capitalismo en nuestro país. Y no tiene por objetivo que nos adaptemos a una sociedad menos injusta, sino avanzar hacia un orden fundado en una sociedad justa.

Pero ningún proyecto tiene posibilidades de éxito sin un control social de las grandes decisiones.

Un proyecto de este tipo sólo puede ser promovido y ejecutado por una coalición en donde la izquierda democrática, el socialismo, desempeñe un rol protagónico central, pues las experiencias muestran que únicamente un partido de este color ideológico puede ser garante de la reconstrucción de un país en ruinas.

La fusión del Partido Socialista Democrático y del Partido Socialista Popular es un primer paso. Faltan, por cierto, otros. Los que faltan sólo se podrán dar de la mejor manera si los que aún creen que el socialismo no es una cosa del pasado intervienen para colaborar en el desarrollo de estas ideas simples y en la búsqueda de la identidad que una fuerza de izquierda necesita en estos momentos de colapso social, político y económico de nuestro país. □

Viene de contratapa

Lula mandando en Pérez Companc

privatizada, en 1996, YPF ganaba 1.539 millones de dólares. Es más, Repsol había tenido problemas para licitar áreas de YPF, ya que la petrolera española no contaba con los estándares internacionales requeridos por la empresa argentina. YPF tenía petróleo (lo que es determinante en ese mercado), Repsol no lo tenía. Aun cuando el acceso de ésta a mercados de capitales europeos le permitió hacer una oferta muy tentadora para los accionistas en 1999, el simple uso legal de la "acción de oro", que Menem y Roque Fernández se negaron a utilizar, hubiera detenido la compra. En el caso de Pérez Companc, evidentemente, la crisis argentina crea problemas de financiamiento a una empresa muy endeudada. Pero buena parte de la deuda estaba ya siendo refinanciada, y cualquier alto ejecutivo de la empresa opina que era perfectamente viable con una inyección de capital que podía

lograrse mediante una asociación (en la que de hecho el *management* estaba trabajando), préstamo, etcétera, y no una simple venta. La pesificación de tarifas eléctricas en la Argentina no afectaba esencialmente los negocios de un grupo que basa el 90 por ciento de su facturación en petróleo y gas, y que cuenta con abundantes reservas de hidrocarburos en la Argentina, Perú, Venezuela y Ecuador. Entonces, la entrada de Petrobras tiene más que ver con una desregulación que no dejó armas al Estado, como puede ser una simple cláusula contra la entrada masiva de una empresa extranjera ("sobre todo estatal" que implique el dominio de un recurso estratégico. Y, desde luego, con capitalistas que siguen aborreciendo el riesgo de la competencia y que, ante el fin de los tiempos de la ganancia fácil, se recuestan en la ventaja comparativa, en los alimentos, en los *Helados Munchi* después de manejar por años un recurso estratégico mundial como el petróleo.

En suma, ni siquiera se trata de grandes potencias del Norte, sino de países como Brasil y España, que no hace mucho tuvieron indicadores económicos comparables a los de la Argentina. Países que no tienen grandes reservas de petróleo y que integran verticalmente sus empresas con el petróleo argentino. Más bien la ceguera y corrupción del menemismo, la nefasta hegemonía cultural de organismos como el CEMA y FIEL, cuya estrechez mental, baja calidad de cuadros y desprecio por lo nacional no encuentran equivalentes en ninguna derecha del mundo, son el origen último de semejante estado de cosas. La Argentina tuvo la peor variante de neoliberalismo que, a diferencia de lo sucedido en países afines como Chile, Brasil y España, no vació en dejar a sectores estratégicos y a rentas cuasimonopólicas de la economía en manos extranjeras. No se trata del lamento de nacionalistas trasnochados, sino del modesto reclamo necesario para que no sea preciso llamar a Brasília y a Madrid para elaborar una política "nacional" de hidrocarburos; apenas la humilde aspiración de poder pensarse como proyecto colectivo de nación. □



Manacá (1927), detalle.

INTERNACIONAL

Los tribunales militares de Bush y el fantasma de la dictadura

Ésta es una versión reducida y editada con autorización del autor, de un artículo que aparecerá en el número de diciembre de 2002 de la revista *Constellations*. En este ensayo, Arato desarrolla un ejercicio crítico del presente por el que atraviesa el régimen político en los Estados Unidos. Centrándose en la decisión de juzgar en tribunales militares especiales a los extranjeros detenidos en el marco de la "guerra contra el terrorismo", el autor se pregunta si la concentración de poder en manos del Ejecutivo no ha dejado de ser una medida de emergencia para convertirse en un objetivo político en sí mismo.

Andrew Arato*

En contradicción con el mito reinante, los Estados Unidos (el todo y sus partes) han rozado la dictadura muchas veces en sus 225 años de historia.¹ Y en esas oportunidades no fue la visión de los constituyentes, sino el espíritu republicano de sus líderes lo que mantuvo al país del lado constitucional de la línea que divide gobierno de emergencia y mera dictadura.² Los mismos "padres fundadores" no hubieran visto con buenos ojos esta dependencia para con el carácter de algunos individuos. Sin embargo, su Constitución escrita, aquella que en tiempos de emergencia sólo permite la suspensión del *habeas corpus* exclusivamente por parte del Congreso, es una invitación a ser violada si la crisis es suficientemente grave y repentina. Esto ha sido parte del problema, no de su solución. Aun peor, la Constitución de los Estados Unidos, en el sentido material de Hans Kelsen,³ nos ha provisto gradualmente de un régimen de emergencia que pone a nuestras libertades directamente en manos de un Poder Ejecutivo que en momentos de crisis tiende a escapar al control de los otros poderes. Por último, para completar una imagen ya suficientemente desagradable, dada la debilidad estructural de la posición del Ejecutivo en tiempos normales, incluso

cuando goza de una genuina mayoría electoral (a diferencia de lo que ocurre hoy), actualmente existen buenas razones para asumir que el Presidente norteamericano ha desarrollado un interés material (aunque no ideal) en el conflicto externo y hasta en las crisis internas. Y fue siempre durante severas crisis externas e internas cuando el espectro de la dictadura irguió su cabeza sobre los Estados Unidos.

William Safire tiene el mérito de haber sido el único con el coraje (y el conocimiento) necesario para usar la palabra "dictadura" en la crisis actual; y lo hizo desde el primer momento. El 15 de noviembre escribió en su columna de *New York Times*, bajo el título "Haciéndose de poder dictatorial": "(...) mal aconsejado por un frustrado y atemorizado Ministro de Justicia, un Presidente de los Estados Unidos acaba de asumir lo que puede considerarse como el poder dictatorial de encarcelar y ejecutar extranjeros". Llamando al Presidente "nuestro César",⁴ Safire parece ser completamente consciente del sentido clásico de "dictadura" y de su conexión con el Gobierno de emergencia y con la guerra cuando *inter arma silent leges*.⁵ De todas maneras, sobre lo que no reflexiona es sobre la conexión del decreto presidencial de creación de tribunales militares con la dictadura en el sentido moderno. De esta manera les per-

mite a muchos otros descartar como supuestamente escandalosa la mera sujeción de que los Estados Unidos entraron en el territorio de los más recientes regímenes autoritarios latinoamericanos.

No hay ninguna duda de que hoy experimentamos una disminución significativa de nuestras libertades civiles en los Estados Unidos. Las preguntas cruciales son, de todos modos, las siguientes: 1. ¿Se mantuvieron las muchas y relevantes medidas de emergencia tomadas dentro de los límites de la estricta legalidad? 2. ¿Estamos ante una ruptura excepcional (dentro y, quizás, de la legalidad) o ante una tendencia que apunta a una normalidad transformada? 3. ¿Contamos con respuestas posibles de una variedad de actores que, si es necesario, puedan ayudar a restaurar, antes de que sea demasiado tarde, nuestro amenazado estado de derecho? Sólo respondiendo a estas preguntas seremos capaces de reconocer y cuando el límite entre la Roma clásica y la Latinoamericana reciente, entre gobierno de emergencia y dictadura moderna, ha sido, está siendo o será transgredido en los Estados Unidos.

El proyecto original de los tribunales militares

La disposición sobre los tribunales militares dictada por Bush el 13 de noviembre de 2001⁶ implicó una seria pérdida de derechos civiles y de debido proceso, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, para todas las categorías de no ciudadanos bajo el control físico de las autoridades norteamericanas. En efecto, la pérdida de derecho era su propósito explícito; en este sentido, muy preferible a las varias formas de subterfugios (manipulación de la ley de inmigración⁷ y del *status* de testigo material) ya por ese entonces puestas en marcha por el Departamento de Justicia de Ashcroft. Así y todo no sería una

exageración decir que en principio, la disposición de Bush supuso la violación, sino la abierta suspensión, del *habeas corpus* y del debido proceso para alrededor de 20 millones de personas: esto es, los no ciudadanos que residen en los Estados Unidos.⁸

El Presidente ordenó que los no ciudadanos que **el declare por escrito** ser o haber sido miembros de Al Qaeda o de otra organización terrorista internacional, o estar asociados con alguna de esas organizaciones o involucrados en actos de terrorismo internacional de cualquier manera, deben pasar a disposición del Departamento de Defensa, removidos, si fuera necesario, del control de las autoridades civiles; y que "cuando sean juzgados" por ofensas — sin especificar—, los juicios deberán ser llevados adelante por tribunales militares o comisiones constituidas solamente por el Poder Ejecutivo. Suspendiendo todo vestigio de juicios llevados a cabo por jurado, el acusado será juzgado por un panel que evaluará "hechos y ley", y que decidirá sobre culpabilidad o inocencia así como sobre sentencia (incluyendo la pena de muerte) por una mayoría de dos tercios (de los presentes). Más alarmante todavía: estas medidas no se restringen a individuos acerca de los cuales haya "razones para creer" que estén involucrados directamente en alguna organización o actividad terrorista. La disposición agrega que éstas pueden aplicarse a cualquier no ciudadano mientras, por razones que no se especifican, pueda decirse que es "en el interés de los Estados Unidos".⁹ Inicialmente, no todos los detalles acerca de los tribunales propuestos fueron publicados; pero se supo que la disposición declara que se reducirán los estándares de evidencia y prueba, que los juicios pueden ser secretos en parte o en su totalidad, y que la apelación puede hacerse sólo ante el Presidente o el Secretario de Defensa, si es que el Presidente decide de elegir su abogado y la obligación de hacer pública toda evidencia en su contra y de proveer de suficiente tiempo como para preparar una defensa razonable no son garantizados, y sin presunción de inocencia, la carga de la prueba deja de caer automáticamente en la acusación.¹¹ La disposición busca explícitamente im-

pedir la intervención de todo tribunal a lo largo de todo el proceso: tanto estatal como federal, extranjero o internacional, incluida la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.¹² De este modo, hay buenas razones para argumentar que esta disposición suspende la separación de los poderes y trata de concentrar tanto la generación de las normas relevantes como la capacidad de enjuiciamiento, en el Poder Ejecutivo.

La presidencia y la crisis actual

Lo que está en juego, entonces, no es sólo la cuestión parcial de cómo se regula un estado de emergencia sino la totalidad del diseño constitucional estadounidense. La separación de poderes al estilo norteamericano — como en todos lados —¹³ también aquí ha promovido un patrón de oscilación entre un Ejecutivo débil y una presidencia que tiende a asumir un tipo de liderazgo que transgrede las limitaciones constitucionales. Mientras que en otros países, especialmente en Latinoamérica, la fase fuerte del ciclo con frecuencia ha terminado en abierta dictadura, en los Estados Unidos todas nuestras "dictaduras constitucionales" se han detenido bastante antes de destruir el régimen constitucional. Sería sumamente significativa explorar las razones de esta diferencia y preguntarse si éstas aún se mantienen; pero lo que debe notarse aquí es que los Estados Unidos no han evitado el ciclo característico de este tipo de régimen, sino que sólo han logrado escapar de su versión más disruptiva.

La presidencia de Bush, que arrancó habiendo perdido el voto popular y enfrentado la crisis de Florida, comenzó sumamente débil. Subsecuentemente, sus erradas aventuras en política exterior (Corea, China), en políticas de medio ambiente poco populares y en la posibilidad de un gobierno paralizado (por la defección de Jeffords)¹⁴ eran signos de mayor debilidad, como también lo fue su gran victoria: el descalabro presupuestario generado por su recorte de impuestos, hecho posible por la falta de consistencia de algunos demócratas. Así fue como la presidencia imperial nacida durante la Segunda Guerra y sostenida durante la Guerra Fría

estaba casi completamente en caos cuando Bin Laden y sus seguidores llegaron al rescate de lo que iba a ser su versión más ridícula.¹⁵ La inicialmente bien encaminada campaña afgana y el deseo de la mayoría de los estadounidenses de unirse detrás de su líder quienquiera que este fuera restauraron una presidencia que se encaminaba al fracaso. Hubo un solo "problema": la guerra en Afganistán se ganó rápidamente y el operativo policiazo internacional mantuvo exitosamente a los terroristas bajo control. De ese modo, las medidas de emergencia, incluida la disposición militar, no pueden seguir siendo percibidas como respuesta a una emergencia real. No cabe duda de que su rol se ha convertido, en cambio, en la construcción de una racionalidad de emergencia para el mantenimiento del predominio del Ejecutivo. La emergencia ha devenido su propio propósito y justificación.

En otras palabras, la violación misma de la Ley y el principio moral tiene como objetivo demostrar a aquellos que están dispuestos a creerlo, que un Gobierno profundamente comprometido con las libertades civiles y con la separación de los poderes se ha visto obligado a infringirlas debido a su confrontación prudente y "pragmática" de los peligros que dicen nos acechan. En realidad, el Poder Ejecutivo, en un período en el que su ideología heredada y sus capacidades de liderazgo se encuentran bajo una gran presión, ha desarrollado (como solíamos decir, "objetivamente"), pero quizás también "subjetivamente" un interés en el gobierno de crisis. Dado que nada, salvo las medidas mismas, indica la necesidad de medidas de emergencia, el experimento actual con la dictadura constitucional conlleva mayores peligros que en episodios anteriores. En aquellos casos, se respondió a problemas externos en los que la duración y extensión de las medidas de emergencia podían ser determinadas y limitadas racionalmente. Periodistas demócratas que combatían la guerra o estadounidenses de origen japonés no presentarían ningún peligro cuando las correspondientes guerras hubiesen terminado.¹⁶ Las medidas parcialmente restrictivas implementadas por la Corte Suprema, obstaculizando el paso de una dictadura constitucional a una inconstitucional, fueron

posibles en aquellos casos. Distinta es la situación ante la dificultad de identificar enemigos presentes calificados como "combatientes fuera de la ley" en una guerra sin final, cuya falta de final es, desgraciadamente, del interés de un Poder Ejecutivo que se derrumba. Podemos estar seguros de que nos encontramos ante una larga serie de iniciativas ilegales por un período de tiempo cuya conclusión hoy no está a la vista.

La respuesta en la esfera pública

Las razones de fondo de nuestro experimento actual con la dictadura constitucional son, entonces, políticas, no legales o militares. De ese modo, los límites a estas medidas no residirán en acciones de los jueces, que en términos de precedentes — en la medida en que la definición de la crisis los mantenga en pie — están predispuestos a conceder privilegios a un Ejecutivo en tiempos de emergencia. Es también difícil imaginar cómo un Congreso y un Partido Demócrata increíblemente despolitizados podrían poner límites. De todos modos, la situación no es completamente desesperanzada: dada esta política, ya se ha topado con algunos obstáculos.

Primero y principal, nadie ha sido juzgado por un tribunal militar o comisión, ni en los Estados Unidos ni en el exterior, a pesar de que, en los términos planteados, hubiera habido amplias oportunidades para hacerlo — a no ser que estemos siendo constantemente engañados acerca de las numerosas personas arrestadas, entre las cuales, se nos asegura, hay miembros importantes de Al Qaeda—. Segundo: finalmente se delineó la reglamentación final de los tribunales, sorprendentemente apenas cuatro meses después de la disposición original. Esta reglamentación incorporó muchas de las críticas, lo que representa algo así como una marcha atrás con respecto a la iniciativa original. Aunque claramente no hay concesiones en el asunto fundamental. El Poder Ejecutivo retiene la prerrogativa exclusiva de establecer comisiones militares y su normativa, así como los derechos a decidir quién va a ser juzgado por ellos y a controlar todo el proceso de apelación. Puede ser entonces que las concesiones no sean más que un esfuerzo de relaciones públicas para justificar el

plan original. De todas maneras, éstas definirían los términos del escrutinio público, por lo que la situación será complicada si es que estas comisiones militares llegaran a llevar adelante algún juicio después de todo.

Finalmente, el Gobierno tuvo que retroceder en sus planes de tratar a todos aquellos detenidos en Guantánamo como "combatientes fuera de la ley". A pesar de que no se les otorgó *status* de prisioneros de guerra ni siquiera a los detenidos talibanes, el Gobierno ahora concede que éstos, a diferencia de los detenidos de Al Qaeda, caen bajo la protección de la Convención de Ginebra. Es evidente que en este caso las protestas de organizaciones internacionales y gobiernos preocupados, a través de la mediación de Colin Powell, forzaron un limitado repliegue del Departamento de Defensa. Y podemos estar seguros de que las mismas influencias

están detrás de algunas de las modificaciones introducidas en la disposición sobre tribunales militares. Hay prisioneros detenidos por otros países, algunos de ellos parte de sus propios ciudadanos, que nunca serían extraditados a los Estados Unidos si esas influencias fueran usadas en tribunales sumamente irregulares. Algunos países, particularmente los de la Unión Europea, podrían hasta rehusarse a compartir información o aportar evidencia. Mientras que el Gobierno de los Estados Unidos y particularmente su Secretario de Justicia, Ashcroft, parecen prestar poca atención a ONGs como Amnistía Internacional, Helsinki Watch o hasta la Asociación de Abogados de Estados Unidos — todos ellos ácidos críticos de la disposición sobre los tribunales militares —, afortunadamente lo mismo no puede decirse de gobiernos que poseen otros medios de presión que van más allá de la



Abaporú (1928)

mera exhortación.

Pero la exhortación también puede importar; depende de la fuente... Parecería ser que el Gobierno se vio profundamente afectado por los ataques de *libertarians* como William Safire o el Cato Institute, y que teme una posible alianza entre la izquierda y parte de la derecha sobre este tema. Si el Partido Demócrata hubiese mostrado más coraje, los resultados podrían haber sido mejores. Pero mientras las encuestas muestran un apoyo menos automático para las políticas represivas, los demócratas pueden llegar a recobrar el coraje en contra de una administración crecientemente débil en las políticas democráticas.

Nosotros, por otro lado, no podemos estar seguros de que no haya nuevos y más serios intentos de expandir el actual régimen de emergencia. Sólo una resistencia más sería que la que se ha visto hasta ahora podría resguardarnos

de esa posibilidad. Sería sumamente deseable que una sólida victoria demócrata en las elecciones legislativas de noviembre ayudara a ese partido a recuperar el tema de las libertades civiles, con el que supuestamente deberían tener un mayor compromiso que sus oponentes. Por el momento, quizá sea cierto que debemos oponernos a la expansión ilegítima y peligrosa del Gobierno de emergencia por todos los medios a nuestra disposición —y el poder constituyente no es uno de ellos—.¹⁷ Pero si tuviéramos éxito, si la República sobreviviera en esta oportunidad —lo que probablemente ocurra gracias a la debilidad y a la confusión (y a la pésima administración de la economía) del otro bando—, deberíamos recordar que nunca sabremos cuánto más cerca habríamos estado de perderla si las fuerzas exteriores o interiores que se oponen a nuestra libertad, tanto los subalternos de Al Qaeda como los de Ascheroft, hubiesen sido más poderosas. □

Notas

¹ Tradujo Martín Píot.

² Andrew Arato es profesor de Teoría Social y Política en la *New School for Social Research* de la ciudad de Nueva York y autor de *Civil Society, Constitution, and Legitimacy* y de *Civil Society and Political Theory* (este último con Jean Cohen), entre otros libros.

³ *Constellations* es una publicación de pensamiento crítico y teoría democrática editada en los Estados Unidos y dirigida por Nancy Fraser y Andrew Arato.

⁴ Véase mi libro en preparación, *¿Adiós a las dictaduras?*

⁵ En el sentido moderno del término. El sentido romano de "dictadura" era, por supuesto, aquel de gobierno de emergencia. Este sentido fue violado por primera vez por los dictadores Salla y César.

⁶ *General Theory of State and Law* (Cambridge, 1945).

⁷ Siguiendo con la metáfora en su estilo detallista, Safire tendría que haber dicho "nuestro Salla", dado que G. W. Bush representa claramente el lado oligárquico, y no el popular, de la política estadounidense.

⁸ William Safire, "Voices of Negativism", en *NY Times*, 6-XII-2001.

⁹ "Detención, tratamiento y juicio de ciertos no ciudadanos en la guerra contra el terrorismo".

¹⁰ Véase Ernesto Verdeja, "Law, Terrorism and the Plenary Power Doctrine: Limiting Alien Rights", en *Constellations*, marzo de 2002.

¹¹ Safire "Voices of Negativism", op.cit.

¹² Military Order, sec. 2, sec. 4e (6&7).

¹³ *Ibid*, sec. 4e (4A&B; 8).

¹⁴ Human Rights Watch, Comunicado de prensa, noviembre de 2001.

¹⁵ Military Order, sec. 7b (2).

¹⁶ Es una ilusión pensar que de alguna manera el presidencialismo estadounidense escapa completamente a las vicisitudes de este tipo de gobiernos.

¹⁷ N. del T.: Senador republicano que abandonó las filas de su partido y dio así la mayoría en el Senado a los demócratas.

¹⁸ N. del T.: En inglés, el autor dice "its farcical version", lo que hace alusión a la expresión marxiana de la historia repitiéndose como farsa.

¹⁹ No quiero con esto conceder que las medidas de emergencia en cuestión estuvieran justificadas. Hasta el Comando de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental no vio ninguna necesidad de evacuación y deportación. (N. del T.: el autor se refiere a la guerra civil en el primer ejemplo y a la detención, y en algunos casos deportación, de ciudadanos de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial en el segundo).

²⁰ N. del T.: El autor se refiere aquí a lo difícil —y deseable— que sería reformar la Constitución estadounidense.

LIBROS

Nueva York: un experimento panlatino

Mambo Montage. *The Latinization of New York*. Agustín Laó-Montes y Arlene Dávila, eds., Columbia University Press, 2001.

Debido a la gran diversidad (racial, sexual, generacional, así como de clase, orientación política y nacionalidad) entre las personas que se pudieran considerar "latinas", muchos análisis han concluido en que la latinidad como tal no existe, que es más bien una etiqueta impuesta por los grupos predominantes para homogeneizar, regular y discriminar a las poblaciones latinoamericanas en los Estados Unidos. A diferencia de estos análisis, Agustín Laó-Montes, en su introducción a *Mambo Montage*, propone ver la latinidad como una categoría útil para el análisis social y la organización política, ya que dicho concepto sirve como un modo de identificarse que define un reino de producción cultural, que influye en la distribución de bienes sociales y de poder político, y que alienta la organización de movimientos e instituciones sociales.

Esta colección de ensayos aparece en un momento significativo en la historia de la inmigración latinoamericana en la ciudad de Nueva York. Al analizar los datos relativos a la población hispana del censo de los Estados Unidos de 2000, se advierte que los puertorriqueños, el grupo hispano que históricamente, por lejos, ha sido el mayoritario en esta ciudad global, están por ceder su lugar, o por lo menos compartirlo con otros. En la última década, la población puertorriqueña en Nueva York ha disminuido 12 por ciento, mientras que otros grupos han crecido, de modo que el número de dominicanos en la ciudad está prácticamente a la par del de los primeros, en tanto que los mexicanos se han afirmado en el tercer lugar.

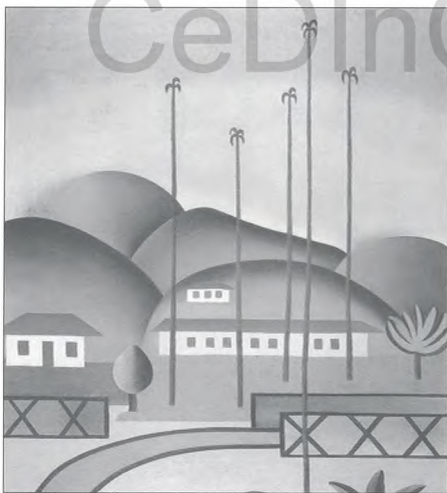
Lo notable aquí es que estos cambios y el crecimiento de los demás grupos hispanos en Nueva York (argentinos incluidos) hacen que la comunidad hispana se esté convirtiendo en una población verdaderamente diversa sin que ninguna nacionalidad ni región de América latina domine en cuestión de números. Agreguemos a esto el hecho de que el grupo hispano alcanzó, en este último censo, 27 por ciento del total de la población de la ciudad, cifra mayor que la de cualquier otra mi-

noría. Se considera que este panorama demográfico podrá tener un efecto profundo en la comunidad, en ámbitos tan diversos como las organizaciones políticas y comunitarias, la educación y los servicios sociales. Con una población más diversa y compleja, surgiría la necesidad de una agenda latina más amplia, y esto haría que Nueva York fuera el primer lugar en poner a prueba la idea de una identidad panlatina.

Siguiendo esta lógi-

ca, es interesante notar que, al mismo tiempo que Laó-Montes encuentra en la latinidad un valor positivo en cuanto a la agencia de los inmigrantes hispanos en la ciudad, éste nos hace considerar la "latinización" como un fenómeno que en gran parte excluye al sujeto latino de su participación, lo que constituye algo sumamente problemático. Aunque define la latinización como el proceso general de producción de discursos de latinidad,

el autor señala una distinción entre las estrategias de latinización de origen anglosajón y las tácticas de los latinos para definirse y representarse. Cabe señalar que, en su introducción, las primeras parecen asociarse con la concepción de Celeste Olalquiaga (*Megalopolis*, 1992) de la latinización como mercantilización, mientras que las últimas entrarían en el planteamiento más complejo del término que hacen Aparicio y Chavez-Silverman



Palmeras (1925)



La negra (1923)

(*Tropicalizations*, 1997), en el cual la latinización figura como un proceso de transcultración tanto contrahegemónico como hegemónico.

El autor de la introducción de *Mambo Montage* entra en diálogo con estos usos anteriores para describir la latinización como el proceso de diferenciación cultural y de producción social a través del cual surge un espacio para la formación de discursos latinos. Según él, la latinización se produce desde el poder y también desde la afirmación del individuo subordinado. Diferencia la latinización "desde arriba", en la que los discursos se producen como parte de la organización de la hegemonía de las instituciones dominantes, de la latinización "desde abajo", en la que los discursos se producen como resistencia a la marginación y a la discriminación, y como la expresión del deseo de producir una definición propia y una búsqueda afirmativa de una memoria colectiva y una comunidad.

Con esta selección de ensayos, que en su mayoría ofrecen un análisis de la relación particular de la comunidad puertorriqueña con lo "latino", Laó-Montes parecería querer destacar el aporte enorme de los puertorriqueños a una latinización más genérica que se encuentra en desarrollo. Al mismo tiempo, al hacer hincapié en el hecho de que los discursos latinos

encuentran un espacio en el que circular a través de una latinización en gran parte puesta en marcha "desde arriba", el autor cuestiona la validez de la misma producción cultural latina. Es más, el hecho de que abogue por la latinización como recurso útil en un momento en que la comunidad puertorriqueña pierde su dominio—aunque sea tan sólo en número— resulta más significativo al considerar que la latinización descrita en este libro está basada en gran parte en la "puertorriqueñidad", y que se presenta mucho más superficialmente la relación de otros grupos latinos con el fenómeno: algunos figuran (si es que realmente figuran) en un solo ensayo sobre un aspecto marginal de su producción cultural en esta ciudad.

Mambo Montage es un libro para la historia que fija el (ahora reducido) lugar central de la comunidad puertorriqueña en el desarrollo latino de Nueva York. Contiene cuatro secciones. La primera, que funciona como una especie de continuación de la introducción del editor Laó-Montes, se titula "The Production of Latinidad: Histories, Social Movements and Cultural Struggles" ("La producción de latinidad: historias, movimientos sociales y luchas culturales") y recoge cinco artículos. Se inicia con el de Nancy Raquel Mirabal, que describe cómo, hacia la segunda mitad del siglo XIX, la

ciudad de Nueva York llegó a ser un lugar central tanto para la organización de movimientos anticoloniales del caribe hispano como para la constitución de las identidades nacionales cubana y puertorriqueña y de la región caribeña. A continuación, Adrian Burgos Jr. escribe sobre la construcción de la identidad latina a través del béisbol a principios del siglo XX. El tercer artículo, de Ramón Grosfoguel y Chloé S. Georatz, analiza la racialización diferencial de los inmigrantes caribeños y la desigualdad correspondiente que experimentan en cuanto al capital económico y simbólico en la ciudad de Nueva York. Los últimos dos artículos de esta sección, de los editores del libro, tratan sobre la problemática e histórica construcción de identidades latinas por medio de luchas y movimientos políticos y culturales.

Las dos secciones siguientes, "Expressive Cultures: Narrating, Imaging, and Performing Latinidad" (Culturas expresivas: narrar, proyectar y actuar la latinidad) y "Latino/a Identities and the Politics of Space and Place" (Identidades latinas y las políticas del espacio y lugar), recogen diversos artículos que destacan los paisajes latinos de Nueva York. Dentro de este contexto, todos los ensayos de la segunda sección trabajan la relación entre las identidades y expresiones culturales latinas y las

puertorriqueñas, y pueden de manifiesto la importancia histórica de la "puertorriqueñidad" para la expresión de lo que hoy en día se llama latinidad; y también la tensión que existe entre lo puertorriqueño y lo latino, ya que actualmente la centralidad del primero se está desvaneciendo. La tercera sección navega por los escenarios latinos de Nueva York a través de diversos estudios de experiencias de diferentes "otras" identidades latinas. La excepción a esta regla es el análisis de Liz Seavenko de cómo las luchas para la afirmación propia y habilitación local de los puertorriqueños en el barrio del *Lower East Side* de Manhattan se traducen en una latinización del lugar, la cual se refleja en que los residentes latinos han efectuado una adaptación del nombre inglés a la pronunciación española: Loaisada. Como suplemento de las tendencias puertorriqueño-fiocéntricas del libro, a continuación figuran artículos sobre los otros: los mexicanos indocumentados, la identidad dominicana, la política gay latina y las mujeres de color de la clase obrera en los sindicatos.

La cuarta y última sección de *Mambo Montage* se titula "Latinizing Cityscapes" (Latinizar paisajes urbanos) porque, según Laó-Montes, trata de la constitución de espacios latinos en los paisajes centrales del poder en Nueva York. Esta descripción es adecuada en lo que respec-

ta al primer artículo de la sección, en el que Arlene Dávila examina la política cultural que se ofrece en las representaciones que hacen las corporaciones hispanas de la identidad y la cultura latinas, y también lo es en cuanto al último, de Vilma Santiago-Irizarry, que analiza el carácter desigual de la latinización de la ciudad en el tema de los derechos del uso de la lengua española. Sin embargo, los restantes artículos posiblemente pertenecerían mejor a la sección anterior, dado que destacan las presencias cubana y brasileña; aunque el último ensayo, de Karen Backstein, que en realidad parece haberse incluido por su análisis de la danza brasileña, posiblemente ofrece el único estudio de lo latino del libro desde la perspectiva de una estadounidense de origen "no latino"; sin duda un punto de vista que enriquece el planteo que hace este libro. La autora cuestiona críticamente de la participación anglosajona en la danza latina, calificada sin más de exotismo, identificando el malestar de algunos "nativos" ante el creciente público "extranjero" que tiene la música latina. La colección se beneficia de haber incluido por lo menos un ejemplo de latinización "desde abajo" que está influyendo profundamente en la cultura dominante de Nueva York.

Antoinette Hertel
(New York University)

¿Por qué ahora? Porque las uvas están maduras

Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Hugo Vezzetti. Colección Sociología y política. Siglo XXI Editores Argentina, 2002.

Impresiones muy fuertes me guiaron durante la lectura apasionante del libro de Hugo Vezzetti. La primera es que estamos ante un libro inexorablemente impopular. Esta constatación me llenó de entusiasmo y de alegría. Creo que uno de los principales problemas de la mayor parte de quienes lo hemos leído es nuestra coexistencia, o convivencia, con un contexto de chatura intelectual doméstica más asfixiante que el desbarajuste financiero y el colapso económico del país.

Libro impopular, entonces. He aquí, en consecuencia, un trabajo corajudo y audaz. Me permito tomar un párrafo para patentizar desde el valiente del autor en muchas de las cosas que dice y que les van a importar la digestión a muchos.

En la página 103, en el apartado "Figuras de la guerra", dentro del subcapítulo "Los fracasos del voluntarismo insurgente", dice Vezzetti: "Llegados a este punto, la discusión sobre si las organizaciones terroristas, no sólo Montoneros, estaban infiltradas por agentes que servían a nuestros enemigos resulta ociosa. Sea por infiltración deliberada o por ceguera e irresponsabilidad,

esperadamente actual. Porque, aun cuando es cierto que la cháchara de la refundación de la democracia aparece hoy de una manera muy ligera, frívola y mediática, también lo es que este hecho resulta en sí mismo significativo. Si tanto se habla, aunque sea de manera cortical, sobre la refundación de la democracia es porque, efectivamente, a los diecinueve años del comienzo del ciclo institucional que estamos viviendo, hay una profunda convicción de que una etapa se ha terminado y no sabemos cómo se reconstruye o cómo se construye la próxima.

En este estudio de la memoria social, hecho con un grado de escrupulosidad muy importante respecto de las verdades aparentes pero convencionales, con una enorme apuesta a los hallazgos del saber intelectual—no importa cuáles sean sus desen-

laces de cara a la sabiduría convencional—, Vezzetti ofrece una trinidad de conceptos, esquemas en el que me quiero detener.

Primero, hay una visión desangelada, y por eso necesaria y vital, de la historia argentina contemporánea. En el párrafo que seleccioné—que en gran medida nos asocia con una obra que respetó, aun en su carácter polémico: el libro de Pablo Giusani sobre los Montoneros, La soberbia armada—, hay en acto un postulado que me parece necesario tratar con mucha seriedad, sobre todo en estos momentos de derrumbe institucional. Es el postulado de la corresponsabilidad de todos los sectores, fragmentos o núcleos que forman parte de la Argentina a la hora de determinar de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que no podemos solucionar en un futuro inmediato.



Estudio, la taza (1923)

El "poder redentor de la violencia", que el autor define como un desarrollo cierto y verificable, y que mi propia generación, asociada habitualmente a los años setenta, vivió de manera fehaciente, se me antoja un dato central. Habla de una convicción que no arranca con esa década del setenta y que tampoco termina con la derrota de los grupos guerrilleros. Ese poder redentor de la violencia aparece como una de las construcciones de la memoria, pero, además, como uno de los relatos históricos que están presentes en esta crónica de hoy. Sería indispensable que no perdiéramos de vista.

Con frecuencia nos preguntamos, ya sea en la actividad periodística como en otras disciplinas intelectuales, por los orígenes remotos de nuestro actual predicamento. Tengo la sensación de que uno de los interrogantes más descorazonantes o, en todo caso, más intrigantes, con el que hoy nos enfrentamos, es tratar de reconocer las pistas del pasado en la trucuclenta situación de hoy. Y a veces, hasta un registro casi cinematográfico ayuda en esos casos.

Los invito a detenerse ante la pantalla de los televisores para contemplar la escena de los ahorristas que golpean portones de bancos y sacuden persianas metálicas. Los invito, sobre todo a quienes tienen formación psicológica, a detenerse en esa fotografía de nuestra realidad: personas que,

a toda vista, no parecen estar demasiado en control de lo que están haciendo y durante largas horas patean, literalmente, las puertas de los bancos. Los invito a entender esto. Un actor cómico popular, Nito Artaza, encabeza manifestaciones y formula reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquella que con su llegada en 1979, antes de la Guerra de Malvinas, habría de poner en muchos problemas a la dictadura militar y habría de generar una movilización del régimen militar y de los sectores en que se apoyaba la dictadura, contra lo que llamaban la "campesina anti-argentina". Esa Comisión aparece hoy situada en el imaginario de los ahorristas que significaron los acontecimientos previos que llevaron a la dictadura militar, para tratar de entender muchas de las conductas y laberintos actuales, muchos de los caminos ciegos de hoy.

Hago esta mención porque en todo momento de la lectura de *Pasado y Presente* detecto un puente, que no califico como voluntario por parte del autor, y que remite permanentemente al intento de comprensión de la noche actual, de esta oscuridad que nos enfrenta con una desagregación de las instituciones y con una falta de postulado, activo o afirmativo, de un modelo que pueda ser efectivamente reemplazado de lo que hoy está muriendo.

En segundo lugar – y me parece digno mencionarlo en este breve resumen, que es apenas una mirada muy subjetiva que se propone

aportar otra más a las muchas visiones diferentes que van a configurar un cuerpo inevitablemente multicolor donde no siempre habrá acuerdos –, me impresionó por su poderosa actualidad la recreación que hace Vezzetti del clima de extrema barbarie y criminalización del Estado prevaleciente en la Argentina de hace treinta años.

De cara a la idea de interrogarnos permanentemente acerca de las razones de nuestra situación, este libro es una formidable herramienta para aportar elementos de comprensión al vacío actual. Es indispensable comprender en toda su vastedad el terremoto que significó la dictadura militar, pero también el terro de los ahorristas que significaron los acontecimientos previos que llevaron a la dictadura militar, para tratar de entender muchas de las conductas y laberintos actuales, muchos de los caminos ciegos de hoy.

Además, con respecto a la degradación del Estado, Vezzetti menciona algunos conceptos que me parecieran particularmente luminosos. Se ha hablado también de "derrumbe civilizatorio". En la "pretensión de inocencia" de los autores descripta en el libro, nos encontramos con otro poderoso fragmento de la realidad de hoy. Una vez más, la sociedad argentina se pregunta sobre sus responsabilidades y aun cuando ha sido bien advertido que no es lo mismo la res-

ponsabilidad de lo que Vezzetti llama uso sin límites de la violencia, que la de quienes trabajando en contra del orden establecido se involucran en el terrorismo insurgente; es cierto que en ambos casos estamos hablando del mismo país, de la misma sociedad y de un mismo período histórico.

En tercer lugar, el análisis descriptivo de la pretensión de inocencia se constituye en una de las herramientas más fulminantes del trabajo. Y si algo garantiza la "impopularidad" de este libro es la descripción contundente del caso del secuestro de Jacobo Timmerman y de las responsabilidades del periodismo en el proceso de inminencia, llegada, triunfo y ocaso de la dictadura militar. Los juicios y las ponderaciones de Vezzetti sobre las responsabilidades del periodismo frente a la dictadura no son habituales hoy, en el contexto de unos medios de comunicación que pretenden redistribuir la filosofía impecable y escenario de debate plural y maduro de las posiciones más encontradas, donde incluso esos medios abren espacios volados hacia la izquierda. Pero este tipo de pasajes del libro lo harían inadmisibles para esos medios, por aquí están las huellas digitales de su pasado poco presentable. No es cierto que en la Argentina hubo una pelea de los medios de comunicación con la dictadura, como si su-

cedió con la burguesía mediática brasileña, que llegó a publicar durante meses y meses páginas en blanco de sus diarios por negarse a la censura. Acá hubo no solamente complicidad de los editores con las Fuerzas Armadas: esos mismos editores que hoy continúan al frente de esos medios, además, apoyaron activamente al Proceso.

De la misma manera, un fragmento que es verdaderamente estremecedor del libro es la descripción de las responsabilidades civiles y el desmenzamiento, en un valiente acto de "insensatez" políticamente incorrecta, de la complicidad de la sociedad civil, donde nombra incluso la palabra prohibida "delación", cuando Vezzetti habla de las formas diversas de la colaboración con el régimen.

Efectivamente, el libro es explosivo, en la mejor tradición de los hechos intelectuales. Es un volumen apretado, angustiante, en muchos casos enfurecedor, áspero y polémico. Personalmente, podría indicar que no comparto un par de afirmaciones, pero me parecen realmente menores. Creo, por ejemplo, que hubo campos de concentración o de exterminio en otros países de América latina además de la Argentina, que no es el único país que los ha tenido. Pero creo que no tiene mayor importancia esta acotación casi periodística. En el propio Chile de Pinochet, los presos fueron

durante los duros primeros dos años de la dictadura, concentrados en campos de exterminio y ahí murieron varios de los principales colaboradores del presidente Salvador Allende, como su ministro del Interior.

¿Por qué ahora este libro? Porque las cosas están maduras. Su impopularidad no lo debería condenar al ostracismo. Lo puede transformar en una herramienta para enojarse, o para enojarnos, sobre todo con nosotros mismos.

Creo advertir, y es una opinión rabiosamente subjetiva, en esta obra de Vezzetti una formidable inquietud por la necesidad de una nueva institucionalidad. En una sociedad una vez más dominada por los vientos de la moda y la pretensión tan banal de que "se vayan todos", así como por la corriente de reflexiones que sobre ese tipo de discurso reaccionario se han montado, éste es un libro que llama poderosamente a la reflexión, a la seriedad y, sobre todo, a la seriedad discursiva.

Finalmente, quizás en un plano que trasciende mucho la coyuntura y las preocupaciones periodísticas, o nuestras propias inquietudes como ciudadanos de este país, me da la sensación de que el libro de Vezzetti apunta a una clave central de nuestra trayectoria humana: la pretensión de cuestionar la creencia de que existe tal cosa como una "condición humana".

Al hablar de la barbarie, de la criminalización, de los episodios innumerales perpetrados por los asesinos del terror de Estado, así como del descontrol y del apoyo objetivo al empeoramiento de las cosas que implicó gran parte de la actividad del terrorismo insurgente, Vezzetti está haciendo alusión a condiciones que trascienden en mucho la situación histórica. Vuelve, casi hermanando intelectualmente con cierta reflexión de Octavio Paz, a preguntarse por el sentido de la palabra "progreso", por el significado de ese concepto y por la pretensión de que la palabra "humano" garantiza una positividad ética de la que carecen aquellos que no lo son.

El libro nos vuelve a

poner frente a nuestras responsabilidades, no sólo a la gente que en aquella época era joven, sino a los que seguimos activos. Nos coloca otra vez ante situaciones que exigen una nueva mirada, ante lo insondable de esa condición humana, ante la aparentemente irrefrenable capacidad de los seres humanos de producir realidades abominables. El libro de Vezzetti es indispensable.

Pepe Eliashev

* Este texto es una versión corregida por Pepe Eliashev de la intervención que expuso en la presentación de *Pasado y Presente*, llevada a cabo el 12 de junio pasado en el auditorio de la Fundación Goethe, con la participación, también, de Milda Sabato, Gabriela Cernat y Hugo Vezzetti.

Ensayos sobre la decadencia argentina

El país de los últimos días

El derrumbe político. En el ocaso de la convertibilidad, Marcos Novaro (comp.). Trabajos de Alejandro Bonvecchi, Hernán Charovsky, Edgardo Mocca, Marcos Novaro y Vicente Palermo. Ed. Norma, 2002. Buenos Aires.

Por qué cayó la Argentina. Imposición, crisis y reciclaje del orden neoliberal, Julio Sevares. Ed. Norma, 2002. Buenos Aires.

La República vacilante. Entre la furia y la razón, Natalio Botana (conversaciones con Analía Roffo). Ed. Taurus Alfaguara, 2002. Buenos Aires.

Visito en proyección se puede aventurar de que el bien de gobierno de aquello que supo llamarse "La Alianza" (1999-2001), no será de los que mayor atracción susciten en los investigadores y estudiosos de nuestra historia. No hubo en este segmento

duelos restallantes entre líderes políticos destacados. Podría haber sido un paréntesis gris, dócil, híbrido, en la larga sucesión de transiciones inconclusas que se dibujaron como esbozos interpretativos de la crisis argentina. Pero la ensañación racionalista de un salto trancional a la ciudad, incubada por el hartazgo frente a la prolongada experiencia menemista –compañía de sus ansias de autoconvenimiento con el ingreso al Primer Mundo de principios de los 90–, tuvo corta duración.

Sin embargo, el integreño aliancista es un arcn que guarda secretos, lecturas y labores interrumpidos dentro del cual se perciben hurgar para comprender los porqués del estallido que lo trunó. No por nada los dos hechos que convierten ese período en una "zona caliente" fueron precisamente su esperanza y su incierto inicio –marca límite a las pretensiones de establecer un singular tipo de régimen hegemónico– y su lastimoso y cierto –triste y solitario– final, cuando los últimos vestigios formales de gobierno se autodisolvieron y la sociedad se encontró ya con que el rey estaba desnudo, sino que ella misma había quedado desprovista de todo ropaje, sin gobierno, y sin moneda, enfrentada cara a cara con su propia ofrapia de dirigentes, reglas de funcionamiento, contratos y bases de sustentación.

La Convertibilidad como piso y como cepo, progresivamente insostenible, sobre los que vivieron Gobiernos y sociedad en esos dos años de expiración, funcionó también como una perfecta metáfora que ilustró la insustentabilidad de otros pilares no menos importantes que quedaron atados a aquel destino: el pacto entre gobernantes y gobernados, la capacidad administrativa y de arbitraje del Estado, la paciencia de los sectores arrojados fuera del sistema.

Pero ¿qué es lo que ocurrió en las cabinas de comando y en la sala de máquinas de aquel Titanic que fue la Argentina del pasaje de un siglo a otro? Es lo que nos cuentan estos trabajos que, desde distintos ángulos de observación y abordajes analíticos, buscan elucidar los lugares comunes y explicaciones reduccionistas que acompañaron con sesgo determinista el hundimiento de diciembre de 2001. Las etapas de ese viaje sin punto de llegada iniciado en diciembre de 1999 que dan delimitadas por algunas balizas reconocibles: los sucesivos ajustes y batallas de medidas económicas que infructuosamente buscaron revertir el ciclo recesivo y la desconfianza de los mercados; las denuncias por sobornos en el Senado, en agosto de 2000; la renuncia de Carlos Chacho Álvarez en octubre; la salida del equipo económico de

José Luis Machinea en marzo de 2001; el fugaz y abortado paso de Ricardo López Murphy por Economía; el regreso a las funciones superministeriales de Domingo Cavallo y, de ahí en más, las alternativas –del "megacanje" a la bancarización forzada y el "corralito"– que conducirían al estrepitoso naufragio de fin de año, definido con propiedad como la experiencia más extrema de descomposición política, institucional, económica y social desde el fin de la última dictadura militar.

Los trabajos de Marcos Novaro y Alejandro Bonvecchi se introducen en un pormenorizado análisis acerca de lo inevitable y lo inevitable de esta crisis, y permiten destacar las oportunidades perdidas de encauzar, al menos de una manera más inteligente, la de por sí difícil e incierta salida de la Convertibilidad monetaria. Resaltan como deficiencias intrínsecas la escasa disponibilidad de recursos políticos (capacidades y posibilidades de articulación institucional y de intereses, sin mayoría parlamentaria y en minoría frente a las provincias) y la personalidad y las percepciones de sus líderes. Sumados a los condicionantes y restricciones objetivas (derivadas principalmente del adverso marco económico externo, signado por el descomunal endeudamiento y el reflujo financiero, y de la recesión productiva con un irremonta-

ble déficit fiscal), los factores señalados terminarían acelerando una resolución autodestructiva que podría, sin embargo, haber tomado otro rumbo de haber primado la cooperación entre el Presidente y el Vicepresidente, y el fortalecimiento de ese vértice en el Gobierno.

Postales, sena, en movimiento

Pero primaron los recelos y una bizarra mezcla de "juego del gallina" (*chicken game*) y dilema del prisionero en el que los dos protagonistas resultaban, más tarde o más temprano, desplumados y perdedores. Entre la actuación de Álvarez como un temerario apostador individual—hasta construir desde la encerrona palácica la escena mediática de su abrupta y resonante escapatoria—y la necesidad y miope perspectiva de De la Rúa y su entorno, que estimaron que se podría atravesar el período blindando el terreno presidencial a la manera de un principado republicano, retirándose de toda intervención costosa en la toma de decisiones, simplemente dejando que las fuerzas contrapuestas y los conflictos se anularan entre sí, cambiando una y otra vez de equipos y funcionarios fusibles, confundiendo el liderazgo presidencial argentino con el de una democracia—o monarquía—parlamentaria europea.

Dentro de este proceso de esterilización del por demás escaso margen de autonomía política con el que debía contar la capacidad de iniciativa gubernamental, Hernán Charosky muestra en la experiencia de la Oficina Anticorrupción de qué manera pudieron desarrollarse igualmente insularidades productivas y acumulación de recursos e insumos con capacidad de perdurar en el tiempo y sobrevivir a las tensiones que desgarraron y terminaron destruyendo a la frágil coalición aliancista. Como contrapartida, Edgardo Mocca describe la fuerte correlación entre esta última enorme frustración política y la corriente de opinión furiosamente antipolítica, cuyos efectos devastadores podrían significar no solamente la inhibición de toda expectativa reformista de carácter socialdemócrata y distributivo por muchos años en el gobierno nacional, sino también el embrión de movimientos populistas autoritarios como respuesta a la fragmentación y la anomia. En igual registro, Vicente Palermo elabora una puesta en sentido de este período con características terminales, en el cuadro histórico más amplio de los casi veinte años de experiencia democrática; y aun más atrás, de las dificultades recurrentes por edificar una nación sobre bases liberales-republicanas inclusivas e igualitarias y una fórmula de gobierno perdurable.

De tal modo que a los problemas de una dirigencia política que no pareció estar a la altura del desafío, ni entender su naturaleza, subyacen factores de cultura política y de acción colectiva más estructurales, que son los que afloraron precisamente tras la caída del Gobierno presidido por Fernando de la Rúa en medio del estallido social y el desgobierno.

En esta línea de reflexión se ubican otros dos libros aparecidos últimamente, cuya lectura complementaria ayuda a completar una mirada abarcadora de la crisis argentina, su magnitud y aristas, sus secuelas y sus posibles alternativas. El trabajo de Julio Sévares propone una revisión de la imposición, crisis, reciclaje y caída del modelo económico neoliberal, en el que los actores principales no son las figuras que entran y salen de la escena de la vida política, y en el que las temporalidades remiten a un bloque histórico de más gruesos contornos. Aparece aquí el derrotero de más de un cuarto de siglo de políticas económicas en el que un bloque dominante, compuesto por las cúpulas empresaria, política, militar y sindical, logró sostener un sistema basado en la acumulación de rentas, la apropiación de bienes públicos, la especulación y la distribución regresiva del ingreso. Natalio Botana, en diálogo con Analía Roffo, se coloca también en

los tiempos mediatos al entender esta fase final como un punto de eclosión—de estallido de la insuficiencia institucional y colapso al mismo tiempo de la constitución política y económica—en lo que se define como una crisis de larga duración que se arrastra y todavía no encuentra una resolución posible.

Son muchas las cuestiones que quedan flotando a la hora de replantear balances sobre la decepcionante experiencia aliancista. Entre ellas podemos destacar: en primer lugar, el llamativo silencio de las fuentes. Es singular, en un país político acostumbrado a la persistencia incandescente de las mismas voces y discursos, que no existan ni actores ni ambiente en condiciones de procesar públicamente una reflexión autorreflexiva. Un ex Presidente arrojado en el olvido y una legión diezmarada de ex funcionarios reinseridos discretamente y a duras penas en la vida activa es lo que dejó aquella debacle; mientras los partidos que la intentaron gobernar se debaten entre la dispersión y la extinción dejando un incommensurable espacio vacío, y al sistema político, entregado a las alternativas de la interna peronista y los acuerdos entre gobernadores, fortalecidos por el colapso del poder central.

Otra cuestión remar-

cable es el epílogo de una dinámica reiterada desde los inicios de la recuperación democrática, entre políticos que no se hacen cargo de los retos económicos y economistas que no se hacen cargo de los retos políticos. Las relaciones entre el Presidente y el Ministro de Economía transitarán en distintos grados esta ecuación mal resuelta que encuentra en la dupla De la Rúa-Cavallero II el tramo final más paradigmático. La asociación entre decisionismo presidencialista y neoliberalismo, patrimonialismo y mercado, que operó con indudable eficacia durante la década del 90 pero que se quedó sin sustento externo e interno, terminó funcionando en el vacío hasta su implosión última. Finalmente, una inevitable reflexión acerca del cruel efecto demostrativo de que nada de lo ofrecido por aquel Presidente y los elencos que intentaron capearlo—la pretensión improbable de una salida mesurada del menemismo—prometía en definitiva algo muy distinto de lo que mostraron en su paso por el Gobierno; cuando hubiera hecho falta probar otras cosas, advertidos de la inminencia de un despedimento. Pero, como en la fábula del escorpión, hacerlo de otro modo no parecía "estar en su naturaleza". Hasta que la realidad, sencillamente, dijo basta y ya fue demasiado tarde.

Fabían Bosser

Al decir de Marx

De te fabula narratur

El maestro en la globalización, Joseph E. Stiglitz, Taurus, 2002, Buenos Aires.

Lo primero que hay que destacar del libro de Stiglitz es la oportunidad de su aparición, en particular para los desventurados habitantes de estas tierras australes. La necesidad que tenemos de comprender con profundidad los rasgos y la dinámica del capitalismo mundial que nos toca vivir, y la necesidad de reformas de amplio alcance para que el mundo y también nuestro país adquieran un "rostro más humano", lo hacen insoslayable.

Pocos grandes economistas han escrito para explicar en lenguaje llano al ciudadano educado, de cualquier profesión u oficio, cómo funciona el mundo en que vive y qué cosas hay que hacer para mejorarlo. Stiglitz tiene todos los pergaminos para hacerlo, premio Nobel de Economía en 2001—como esperaban que lo fuera algún día, con resignación, algunos, todos los que compartieron o fueron testigos de su brillante carrera académica—, miembro desde 1993, y posteriormente presidente, del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton y economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial (BM) entre 1997 y enero de 2000. Es decir, estuvo en la Casa Blanca cuando Rusia emprendió la transición desde el co-

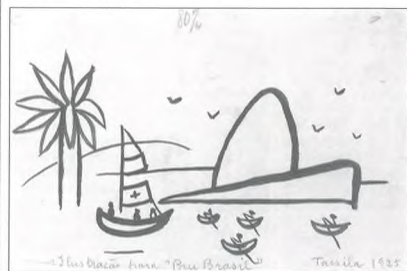
cas a lo largo de su reciente libro.

Con algunos pocos casos, el personaje elegido por la academia sueca, además de sus aportes específicos a la ciencia económica, expresa el espíritu de cambio de una coyuntura histórica. Ésa fue la situación cuando en 1976 le fue otorgada la distinción a Milton Friedman (que no casualmente escribió también para los hombres y mujeres comunes). A mediados de los años 70, llegaba a su fin el cuarto de siglo de boom económico comenzado en la posguerra. Los problemas estructurales que presentaban las economías más avanzadas—crisis del "fordismo", protestas sociales, inflación creciente, agudización de la competencia por la presencia en la arena mundial de Japón, los futuros "tigres asiáticos" y otros países semindustrializados—y la crisis del petróleo—fueron reducidos a uno solo: exceso de estadismo y la necesidad de la vuelta a las sanas prác-

ticas de libre mercado que las políticas keynesianas habían reemplazado. En los primeros años de la década, todavía el presidente Nixon había alcanzado a decir: "todos somos keynesianos", pero la crisis mundial de 1974-1975 y su secuela, la llamada "estancamiento"—estancamiento con inflación—volvieron los dados hacia las recomendaciones de política del viejo profesor de Chicago, que desde mediados de los años 50 venía criticando el exceso de estadismo. Las dictaduras terroristas iniciadas en Chile en 1973 y en la Argentina en 1976 brindaron la oportunidad a sus discípulos de realizar sus primeros ensayos.

La academia sueca anticipó, entonces, cuáles serían las ideas económicas que iban a dominar por un largo período e intuyó que ellas fundamentarían la respuesta más probable a los desequilibrios de parte de los poderosos del mundo, quienes habían creado su propio

furo de discusión: la Comisión Trilateral. Los arribos al poder de la señora Thatcher en el Reino Unido en 1979 y de Reagan en los EEUU en 1980, corroboraron esa presunción. No es para nada casual que el cambio de guardia también se produjera en el BM en 1981: su nuevo presidente llegó acompañado de una nueva economista jefe (el cargo de Stiglitz tres lustros después), llamada Anne Krueger, la misma que, veinte años más tarde, nos maltrata desde la segunda jerarquía del Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta 1980, recuerda Stiglitz, el equipo de economistas del BM "se había concentrado en cómo los mercados fracasaban en los países en desarrollo y en lo que los Estados podían hacer para mejorar los mercados y reducir la pobreza, pero para Krueger el Estado era el problema. La solución de los males de los países subdesarrollados era el mercado libre" (pág. 41). Al comenzar los años



Pan de Azúcar (1925)

80, ante el fracaso en los países industrializados de lo que Alan Lipietz llamó la "administración keynesiana" de la crisis de la segunda mitad de los 70, se abandonaron los objetivos de crecimiento y pleno empleo, y fueron reemplazados por la lucha antinflacionaria como primera prioridad.

Una situación de contornos parecidos parece explicar el otorgamiento a Stiglitz del premio Nobel de Economía 2001. La vieja academia sueca volvió a percibir que las cosas debían cambiar y destaca a quien expresa mejor ese espíritu de cambio.

Como en 1976, no se equivocó. Y lo más importante —a diferencia de Friedman, que era el profeta del desmantelamiento del Estado de Bienestar, de los mercados libres, y oído atento a las demandas del gran capital financiero internacionalizado— Stiglitz piensa, "La ideología del libre mercado debe ser reemplazada por análisis basados en la ciencia económica, con una visión más equilibrada del papel del Estado, a partir de una comprensión de las fallas, tanto del mercado, como del Estado" (pág. 346).

Además, ha comprobado de primera mano, como él mismo lo dice, el efecto devastador que la globalización puede tener sobre los países en desarrollo; especialmente sobre los pobres en esos países. Pero cree que la globalización —que define como

la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y, en menor grado, de personas a través de las fronteras— "puede ser una fuerza benéfica y su potencial (cursiva de Stiglitz) es el enriquecimiento de todos, particularmente los pobres; pero [...] que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en que la globalización ha sido gestionada...".

No cabe duda de que Stiglitz es un personaje singular; se trata de uno de los pocos que en la historia dejarán su impronta en la construcción de la ciencia económica y que ha ocupado cargos de máxima jerarquía en la estructura del poder en el ambiente internacional. No obstante, comparte las críticas que la protesta social y política formula frente a la reorganización de la economía y a la sociedad mundial. Pero esa singularidad es el progreso; los países en desarrollo la deben aceptar si quieren crecer y luchar eficazmente contra la pobreza. Sin embargo, para muchos en el mundo subdesarrollado la globalización no ha cumplido con sus promesas de beneficio económico" (pág. 31-32).



El toro (1928), detalle

espontánea contra el estado de cosas actual: Stiglitz es un científico que, como Keynes, piensa que los asuntos humanos pueden ser conducidos con mayor racionalidad, que las instituciones privadas, públicas y estatales tienen un papel esencial que cumplir, y que se debe dar cuenta de las restricciones que supone una economía de mercado constituida por agentes económicos más o menos atomizados. No hay en su visión del mundo lugar para la magia, ni para salvadores providenciales, sí, en cambio, para la sensatez y la prudencia.

La primera pregunta que se hace Stiglitz es: ¿Por qué la globalización —una fuerza que ha producido tanto bien como ha llegado a ser tan controvertida? Su reflexión sobre esta cuestión es: "quienes vilipendian la globalización olvidan a menudo sus ventajas, pero los partidarios de la misma han sido incluso más sesgados; para ellos la globalización (cuando está típicamente asociada a la aceptación del capitalismo triunfante de estilo norteamericano) es el progreso; los países en desarrollo la deben aceptar si quieren crecer y luchar eficazmente contra la pobreza. Sin embargo, para muchos en el mundo subdesarrollado la globalización no ha cumplido con sus promesas de beneficio económico" (pág. 31-32).

La lista de Stiglitz sobre las asignaturas pen-

dientes de la globalización puede ser comparada por casi todos los "globafóbicos": no ha conseguido reducir la pobreza, pero tampoco, garantizar la estabilidad; la globalización y la introducción de la economía de mercado no han producido los resultados prometidos en Rusia y en la mayoría de las demás economías en transición desde el comunismo hacia el mercado (marca el contraste acusado entre la transición rusa, manejada por las instituciones económicas internacionales, y la china, manejada por los propios chinos: en 1990, el PBI chino era 60 por ciento del ruso, y a finales de la década, la situación se había invertido); los países occidentales "forzaron a los pobres a eliminar las barreras comerciales, pero ellos mantuvieron las suyas e impidieron a los países subdesarrollados exportar productos agrícolas, privándolos de una angustiosamente necesaria renta vía exportaciones"; la Ronda Uruguay del GATT, que dio nacimiento a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, también incluyó la cancha a favor del mundo desarrollado tanto en términos de los regímenes comerciales como de propiedad intelectual (págs. 32-35).

El balance de Stiglitz es descarnado: "Si los beneficios de la globalización han resultado en demasiadas ocasiones inferiores a lo que sus defensores reivindican,

el precio pagado ha sido superior, porque el medio ambiente fue destruido, los procesos políticos corrompidos y el veloz ritmo de los cambios no dejó a los países un tiempo suficiente para la adaptación cultural. Las crisis que desembocaron en un paro masivo fueron a su vez seguidas de problemas de disolución social a largo plazo —desde la violencia urbana en América latina hasta conflictos étnicos en otros lugares, como Indonesia—. Con justicia, Stiglitz indica que estos problemas no son precisamente nuevos, "pero la reacción mundial cada vez más vehemente contra las políticas que conducen a la globalización constituyó un cambio significativo", porque "hasta la llegada de las protestas habían pocas esperanzas para el cambio y pocas salidas para las quejas [pero] [...] los sindicalistas, estudiantes, ecologistas—ciudadanos corrientes— que marcharon por las calles de Praga, Seattle, Washington y Génova añadieron la urgencia de la reforma a la agenda del mundo desarrollado" (págs. 35-36).

A partir de dar expresión al anterior en el primer capítulo, Stiglitz nos lleva a conocer (cap. 2 a 7) diversas experiencias y situaciones nacionales que le tocó vivir de cerca desde sus funciones en la Casa Blanca y el Banco Mundial. Así nos acerca a los procesos vividos en los años 90 en países tan disímiles y distan-

tes como Etiopía, Botswana, Malasia, China, Corea, Tailandia, Indonesia, Rusia y varios otros que ilustran la gama de estrategias aplicadas y sus resultados diversos. Desde el inicio de este fascinante y lacerante viaje, comienzan a encontrar fundamentalmente algunas críticas medulares que se reiteran desde hace tiempo: las soluciones propuestas por el llamado Consenso de Washington —sean sus portadores el FMI (protagonista principal), el Tesoro de los EEUU o asesores académicos que transmiten las nociones de "libro de texto" de cómo funcionan los mercados— tienen el común denominador de una concepción ideológica de los mercados y del Estado, de raigambre fundamentalista, que no da cuenta de las particularidades nacionales, de la naturaleza de los problemas propios, de los riesgos a los que se expone la subsistencia material de las personas y de la erosión de las bases de la convivencia social bajo normas democráticas.

Por otro lado, también quedan claras evidencias de que la búsqueda de soluciones propias, en muchos casos antagónicas a las formuladas por los organismos internacionales, en particular el FMI, ha producido mejores resultados en términos de crecimiento y bienestar en varios países. Con gobiernos muy diversos y con mucha diferencia en su apego a las normas de la vida

democrática, pero hasta cierto punto conscientes de las prioridades de sus economías y de sus pueblos, por las razones que fueran, algunos siguieron caminos alternativos con mejores resultados que los "mejores alumnos" del FMI en distintos momentos. Ésos son los casos de China y Polonia, entre los más notables.

Stiglitz propone analizar para comprender lo que falló, el comportamiento de las tres instituciones principales que gobiernan la globalización: el FMI, el BM y la OMC; particularmente de los dos primeros, porque han estado en el centro de las grandes cuestiones económicas durante las últimas dos décadas, como las crisis financieras y la transición de los países excomunistas a la economía de mercado.

Al FMI, en particular, se le encargó impedir una nueva depresión global en la segunda guerra mundial. Pero, lamentablemente, el FMI ha cambiado profundamente a lo largo del tiempo. A saber: a habiendo sido fundado en la creencia de que los mercados funcionaban muchas veces mal, ahora proclama la supremacía del mercado con fervor ideológico; b) nacido con la creencia de que era necesaria una presión internacional sobre los países para que acometieran políticas económicas expansivas como subir el gasto, bajar los impuestos o reducir los tipos de interés para estimular la economía; hoy aporta dinero sólo

si los países emprenden políticas que contraen la economía, como recortar los déficit y aumentar los impuestos o los tipos de interés.

Además, apunta que desde principios de los años 80, con el nuevo clima intelectual de la izquierda-reaganiano, aunque los objetivos del FMI y el BM seguían siendo distintos, sus actividades se entremezclaban de modo creciente. La crisis de endeudamiento de los 80, que sacudió al mundo en desarrollo, y la transición hacia la economía de los países excomunistas ampliaron el campo de acción del FMI a escala planetaria, con el BM como socio menor. Ambas instituciones, a su vez, quedaron subordinadas a la voluntad colectiva del G-7 (los gobiernos de los siete países más industrializados) y, en grado mayor, del Tesoro de los EEUU, como lo aprendió el Gobierno argentino en el primer semestre de este año.

Stiglitz concluye en que el FMI, medio siglo después de su fundación, no ha cumplido su misión. Ha cometido errores en todas las áreas en las que ha incurrido: desarrollo, manejo de crisis y transición del comunismo al capitalismo. En los problemas del FMI y las demás instituciones económicas internacionales subyace un problema de gobierno: quién decide qué hacen. Las instituciones están dominadas no sólo por los países industrializados más ricos, sino también por

los intereses comerciales y financieros de esos países, lo que naturalmente se refleja en las políticas de dichas entidades.

Los últimos capítulos de Stiglitz discuten las reformas necesarias de las instituciones internacionales que gestionan la globalización. Luego de una crítica demolidora a los intentos gatopardistas que conlleva la propuesta de una nueva agenda del FMI (cap. 8), Stiglitz formula su propia propuesta para caminar el futuro. Parte de que la globalización actual no funciona, pero cree que no es factible ni deseable abandonar la globalización. Piensa que ha producido grandes beneficios: el éxito del Este asiático, mejoras en la salud y una activa sociedad civil global que batalla por más democracia y más justicia social. "El problema no es la globalización sino el modo en que ha sido gestionada" (pág. 299).

¿Qué nos dice Stiglitz para el semestre del "cambio al futuro"? Percibe que la situación actual del mundo presenta rasgos similares a la que se abrió con la Gran Depresión de los años 1930: el sistema capitalista está en una encrucijada. Ve alentador que haya un creciente reconocimiento de los problemas y una creciente voluntad política de hacer algo, aunque piensa que queda mucho por delante para cerrar la brecha entre la retórica y la realidad. Piensa que la reforma de los intereses económicos inter-

nacionales llevará mucho tiempo, por lo que propone estimular las reformas que cada país pueda acometer por sí mismo: "los países en desarrollo deben asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Pueden administrar sus presupuestos de modo que consigan vivir por sus propios medios, por magra que esta idea resulte, y eliminar las barreras proteccionistas que derraman copiosos beneficios para unos pocos pero fuerzan a los consumidores a pagar precios altos. Pueden imponer estrictas regulaciones para protegerse de los especuladores foráneos o de los desmanes corporativos locales. Y lo más importante: los países en desarrollo necesitan Estados eficaces, con un poder judicial fuerte e independiente, responsabilidad democrática, apertura y transparencia, y quedar libres de la corrupción que ha asfixiado la eficacia del sector público y el crecimiento del privado" (pág. 347).

Esto nos sugiere que nuestras reformas internas van a necesitar, por lo menos, tanto tiempo como la reforma del sistema económico internacional. Lamentablemente, casi todo lo que dice Stiglitz en su libro puede resumirse para nosotros en las mismas palabras con que Marx les advertía a los alemanes que miraban como ajeno el proceso de industrialización en las británicas: *De te fabula narratur*.

Pablo Bustos

ENSAYO

Reflexiones sobre el concepto de multitud*

Paolo Virno

Paolo Virno nació en Nápoles en 1952 y actualmente se desempeña como profesor de Ética de la Comunicación en la Universidad de Calabria. Es autor de muchos libros, ninguno de los cuales hasta ahora ha sido traducido al español:

Convenzione e materialismo. L'unicità senza aura (Theoria, 1986); *Mondanità.*

L'idea di "mondo" tra esperienza sensibile e sfera pubblica (manifestolibri, 1994); *Parole con parole. Potere e limiti del linguaggio* (Donzelli, 1995); *Il ricordo del presente. Saggio sul tempo storico* (Bollati Boringhieri, 1999); *Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanea* (Rubbettino, 2001). Los textos que aquí publicamos

pertenecen a esta última obra, en la que Virno pretende delinear una teoría política basada en el "éxodo", que no es un comportamiento de protesta, sino un modelo de acción, un acto de imaginación colectiva que tiene como sujeto a la "multitud", "pluralidad que persiste como tal" en la escena pública, que se resiste a la obediencia y que es una multiplicidad sin unidad política; que obtura los mecanismos de representación política y que se niega a transformarse en gobierno. Por otra parte, las reflexiones de Virno sobre el concepto de multitud también sintetizan aspectos del actual debate que proponen Antonio Negri y Michael Hardt en su reciente trabajo *Imperio*.

Las dos polaridades, pueblo y multitud, tienen como padres putativos a Hobbes y Spinoza. Para Spinoza, la multitud sirve para indicar una "pluralidad que persiste como tal" en la escena pública, en la acción colectiva, en la atención de los asuntos comunes, sin converger en un Uno, sin evaporarse en un movimiento centrípeto. Multitud es la forma de existencia social y política de los muchos en cuanto muchos: forma permanente, no episódica e intersticial. Para Spinoza, la multitud es el soporte de las libertades civiles (cfr. Spinoza, 1977).

Hobbes "detesta" —uso con debida razón un vocablo pasional y bien poco científico— la multitud, se lanza contra ella. En la existencia social y política de los muchos en cuanto muchos, en la pluralidad que no converge en una unidad sintética, él percibe el máximo peligro para el "supremo imperio", o sea para aquel "monopolio de la decisión política" que es el Estado. El mejor modo para comprender la importancia de un concepto —en nuestro caso, multitud— es examinarlo con los ojos de quien lo ha combatido con tenacidad. Para entender todas las implicaciones y los matices está precisamente aquel que desea borrarlo del horizonte teórico y práctico.

Antes de exponer concisamente el modo en que Hobbes reconoce la detestada multitud, conviene precisar el objetivo de quien lo persigue. Quisiera mostrar que la

categoría de la multitud (precisamente como es tratada por su enemigo-jurado, Hobbes) ayuda a explicar un cierto número de comportamientos sociales contemporáneos. Después de los siglos del "pueblo" y por tanto del Estado (Estado-nación, Estado centralizado, etcétera), vuelve finalmente a manifestarse la polaridad contrapuesta, abrogada en los albores de la modernidad. ¿La multitud como último grito de la teoría social, política y filosófica? Tal vez. Una entera gama de fenómenos notables —juegos lingüísticos, formas de vida, propensiones éticas, caracteres salientes de la moderna producción material— resulta poco o nada comprensible si no es a partir del modo de ser de los "muchos". Para indagar este modo de ser es necesario recurrir a una instrumentación conceptual muy variada: antropología, filosofía del lenguaje, crítica de la economía política, reflexión ética. Es necesario circunnavegar el continente-multitud, cambiando muchas veces el ángulo de prospección.

Dicho esto, veamos brevemente de qué manera Hobbes delinea, como adversario perspicaz, el modo de ser de los "muchos". Para Hobbes, el contraste político decisivo es el que existe entre multitud y pueblo. La esfera política moderna puede tener como baricentro o la una o la otra. La guerra civil, que siempre está presente, tiene su forma lógica en esta alternativa. El concepto de pueblo, al decir de Hobbes, está estrechamente vinculado a la existencia del Estado; es más, es un reverbero, un reflejo; si Estado, entonces pueblo. En ausencia de Estado, nada de pueblo. En el *De Cive*, donde está expuesto a lo largo y a lo ancho el horror por la multitud, se lee: "El pueblo es un algo de uno, que tiene una voluntad única y que se puede atribuir una voluntad única" (Hobbes, 1642: XII, p. 8; pero véase también VI, p. 1, nota).

Para Hobbes, la multitud es inherente al "estado de naturaleza"; por tanto, a lo que precede a la institución del "cuerpo político". Pero el lejano antecedente puede resurgir, como algo que fue removido y que vuelve a hacerse valer en las crisis que vacían a veces la soberanía estatal. Antes del Estado estaban los muchos; después de la instauración del Estado existe el pueblo-Uno, dotado de una voluntad única. La multitud, según Hobbes, aborrece la unidad política, rechaza la obediencia, no respeta los pactos durables, no consigue jamás el *status* de persona jurídica porque nunca transfiere los propios derechos naturales al soberano. A esta "transferencia" la multitud la rechaza sólo por su modo de ser (por su carácter plural) y de actuar. Hobbes, que era un gran escritor, destaca con admirable lapidariez de qué manera la multitud era antiestatal pero, precisamente por esto, era antipolular:

"Los ciudadanos, en cuanto se rebelan contra el Estado, son la multitud contra el pueblo" (*ibid.*). La contraposición entre los dos conceptos es llevada aquí al diapasón: si pueblo, nada multitud; si multitud, nada pueblo. Para Hobbes y para los apologistas de la soberanía estatal del siglo XVII, multitud es un concepto límite, puramente negativo, pues coincide con los riesgos que afectan la estatalidad: es el escombros que a veces puede atascar la "gran máquina". Un concepto negativo, la multitud, pues no se ha ataviado para devenir pueblo en la medida en que contradice virtualmente el monopolio estatal de la decisión política: en suma, un regreso del "estado de naturaleza" en la sociedad civil.

La pluralidad exorcizada: lo "privado" y lo "público"

¿Cómo ha sobrevivido la multitud a la creación de los Estados centrales? ¿Con qué formas disimuladas y raquíticas ha dado muestras de sí después de la plena afirmación del moderno concepto de soberanía? ¿Dónde



San Pablo, Gazo (1924)

se puede escuchar el eco? Profundizando hasta el extremo la cuestión, tratemos de identificar los modos en que han sido concebidos los muchos, en cuanto muchos, en el pensamiento liberal y en el pensamiento democrático-socialista (por tanto, en tradiciones políticas que han tenido en la unidad del pueblo el propio e indiscutible punto de referencia).

En el pensamiento liberal la inquietud provocada por los "muchos" es domesticada mediante el recurso de la pareja "público-privado". La multitud, que del pueblo es la antípoda, toma las semblanzas algo fantasmagóricas y mortificantes de lo que se designa como privado. Incidentalmente, también la diada público-privado, an-

tes de resultar obvia, se ha forjado entre lágrimas y sangre en miles de contiendas teóricas y prácticas: se la debe considerar por ende como un resultado complejo. ¿Qué cosa es más normal para nosotros que hablar de experiencia pública y de experiencia privada? Pero no siempre ha existido esta bifurcación. La ausencia de obvedad es interesante porque hoy estamos ante un nuevo siglo XVII, o bien en una época en la que las viejas categorías explotan y otras necesitan acuñarse. Muchos conceptos que nos parecen todavía extravagantes e inusuales –la noción de democracia no representativa, por ejemplo– acaso ya estén tendiendo a urdir un nuevo sentido común, aspirando a su vez a devenir “obvias”. Pero volvamos al punto. “Privado” no significa sólo personal, atinente a la interioridad de fulano o de mengano; privado significa ante todo privación (*priva*): privación de voz, privación de presencia política. En el pensamiento liberal la multitud sobrevive como dimensión privada. Los muchos son afásicos y están lejos de la esfera de los asuntos comunes.

En el pensamiento democrático-socialista, ¿dónde



La cabeza (1924)

encontramos un eco de la arcaica multitud? Acaso en la pareja colectivo-individual. O, mejor, en el segundo término, en la dimensión individual. El pueblo es lo colectivo, mientras que la multitud está oscurecida por su presunta impotencia cuando no por la desordenada intranquilidad de cada uno de los individuos. El individuo, por lo demás, carece de influencia en las divisiones y multiplicaciones que se realizan lejos de él. En lo que tiene propiamente de singular, el individuo parece inefable. Como inefable es la multitud en la tradición democrático-socialista.

Conviene anticipar una convicción que inmediatamente aflorará en varias oportunidades en mi discurso.

Creo que en las formas de vida moderna, como también en la producción contemporánea (con tal que no se abandone la producción –cargada como está de *ethos*, cultura, interacción lingüística– al análisis económico, sino que se la entienda como una larga experiencia del mundo), se tiene la percepción directa del hecho de que tanto la pareja público-privado como la pareja colectivo-individual carecen de vigencia, muerden el aire, confluyen. Lo que estaba rigidamente subdividido se confunde y se sobrepone. Es difícil decir dónde termina la experiencia colectiva y dónde empieza la experiencia individual. Es difícil separar la experiencia pública de la llamada experiencia privada. En este empaño de las líneas de demarcación se atenúan, o en todo caso resultan poco confiables, también las dos categorías de ciudadano y de productor, tan importantes en Rousseau, Smith, Hegel y luego, si bien como un blanco polémico, en el propio Marx.

La multitud contemporánea no está compuesta ni por “ciudadanos” ni por “productores”, ocupa una región intermedia entre “individual” y “colectivo”; para ella no vale de ningún modo la distinción entre “público” y “privado”. Y es precisamente a causa de la disolución de estas parejas, tan largamente tenidas por obvias, que no se puede hablar más de un “pueblo” convergente en la unidad estatal. Para no entorpecer las cosas, en la unidad estatal, de la cual nos defendemos (lo múltiple es el bien, la unidad, la calamidad de la cual protegernos), es necesario, sin embargo, reconocer que la multitud no se contrapone al Uno, sino que lo redetermina. También los muchos necesitarían de una forma de unidad, de un Uno. Pero aquí está el punto: esta unidad no es más el Estado, sino el lenguaje, el intelecto, las facultades comunes del género humano. El Uno no es más una promesa, sino una premisa. La unidad no es más algo (el Estado, el soberano) hacia lo cual convergen, como en el caso del pueblo,

sino algo que se deja a las espaldas, como un trasfondo o un presupuesto. Los muchos deben ser pensados como individualización de lo universal, de lo genérico, de lo compartido. Así, simétricamente, es necesario concebir un Uno que, lejos de ser algo conclusivo, sea la base que autoriza la diferenciación, o bien que permite la existencia político-social de los muchos en cuanto muchos. Digo esto sólo para destacar que una reflexión moderna sobre la categoría de multitud no soporta simplificaciones increíbles, abreviaciones intrépidas, sino que tiene que afrontar problemas escabrosos: ante todo el problema lógico (a reformular, no a descartar) de la relación Uno/Muchos.

II. Las tonalidades emotivas de la multitud

Quisiera hablar brevemente de la situación emotiva en la que se expande la multitud contemporánea. Aclaro que con la expresión “situación emotiva” no me refiero a un conjunto de propensiones psicológicas, sino a modos de ser y de sentir que invaden hasta el punto de resultar comunes a los más diversos contextos de experiencias (trabajo, ocio, afectos, política, etcétera). La situación emotiva, además de ubicua, es siempre “ambivalente”. Ella puede manifestarse tanto como aquiescencia cuanto como conflicto, ya sea con las semblanzas de la resignación o con la de la inquietud crítica. Dicho de otra manera: la situación emotiva tiene un “núcleo neutro” que está sujeto a declinaciones distintas y hasta opuestas. Este núcleo neutro indica un modo de ser fundamental. Ahora bien, es indudable que la situación emotiva de la multitud se manifiesta hoy con “malos sentimientos”: oportunismo, cinismo, integración social, repudios inagotables, jovial resignación. Sin embargo, es necesario volver de estos “malos sentimientos” al núcleo neutro, o sea: al modo de ser fundamental que esencialmente podría dar lugar también a procesos muy distintos de los que prevalecen hasta hoy. Lo más difícil de entender es que el antídoto, por así decir, puede ser encontrado solamente en lo que por el momento se presenta como veneno.

La situación emotiva de la multitud posfordista está caracterizada por la “inmediata coincidencia” entre producción y eticidad, estructura y superestructura, en la renovación radical del proceso laboral y los sentimientos, tecnología y tonalidades emotivas, desarrollo material y cultura. Detengámonos un momento en tales coincidencias. ¿Cuáles son hoy los principales requisitos que se solicita a los trabajadores dependientes? Hábito de movilidad, capacidad para mantenerse ante las más bruscas reconversiones, idoneidad para cualquier emprendimiento, ductilidad para adaptarse a nuevas reglas, aptitud para una interacción lingüística tan vulgarizada como omnilateral, cualidad para ingeniarlas ante posibilidades alternativas limitadas. Pues bien, estos requisitos no son el fruto del disciplinamiento industrial sino más bien el resultado de una socialización que tiene su baricentro fuera del trabajo. La “profesionalidad” requerida y ofrecida consiste efectivamente en las dotes que se adquieren durante una

prolongada permanencia en un estadio prelaboral, o precario. Dicho de otro modo: mientras se espera un empleo se desarrollan los talentos genéricamente sociales y los hábitos de no contraer costumbres durables, que fungen luego, una vez encontrado el trabajo, de verdaderos “fierros del oficio”.

La empresa posfordista hace rendir este hábito de no tener hábitos, este adiestramiento para la precariedad y la variabilidad. Pero el hecho decisivo es una socialización (con este término entiendo la relación con el mundo, con los otros y consigo mismo) que proviene desde fuera del trabajo, una socialización esencialmente extralaboral. Son los *shocks* metropolitanos de los que hablaba Benjamin, la proliferación de los juegos lingüísticos, las variaciones inintermitentes de las reglas y de las técnicas; son todos éstos los que constituyen la palestra en la que se forjan dotes y requisitos, que sólo después resultarán dotes y requisitos “profesionales”. Bien vista, la socialización extralaboral (que luego, sin embargo, confluye en el “sacerdocio” posfordista) consiste en experiencias y sentimientos en los que la gran



La feria II (1925)

filosofía y la gran sociología del último siglo, desde Heidegger y Simmel en adelante, han reconocido como los rasgos distintivos del nihilismo. La nihilística es una praxis que no goza más de un sólido fundamento, de estructuras recurrentes sobre las cuales hacer cuentas, de costumbres protectoras. Durante el siglo XX, el nihilismo ha parecido un contrapunto colateral de los procesos de racionalización de la producción y del Estado. Dicho de otra manera: por una parte, el trabajo, por la otra, la precariedad y la inconsistencia de la vida metropolitana. Ahora, en cambio, el nihilismo (hábito de no tener hábitos, etcétera) entra en la producción, resulta requisito profesional, es “puesto de trabajo”. Sólo aquel que

es práctico en la aleatoria inconsistencia de las formas de vida metropolitana sabe cómo comportarse en las fábricas del *just in time*.

Resultado casi inútil agregar que, de tal modo, se rompe el esquema mediante el cual gran parte de la tradición sociológica y filosófica se han sentido representadas por los procesos de "modernización". Según tal esquema, la innovación (tecnológica, emotiva, ética) trastocaría las sociedades tradicionales, en las que prevalecían costumbres repetitivas. Filemón y Baucis, los pacíficos campesinos que Goethe describía en *Fausto*, serían erradicados por el empresario moderno. Nada de esto sucede hoy. Ya no se puede hablar de "modernización" en aquellos casos donde interviene la innovación, que por otro lado, lo hace con una periodicidad cada vez más constreñida, en una escena que ahora está completamente caracterizada por la erradicación, por la aleatoriedad, por anonimidad, etcétera. El punto crucial es que la actual excitación productiva se sirve, como de su más apreciable recurso, de todo lo que el esquema de la modernización computa entre sus efectos: incer-

"oportunistismo" y el "cinismo". Tratamos de pasar por el tamiz estos "malos sentimientos", individualizando en ellos un modo de ser que, de por sí, no debe expresarse necesariamente en formas indecentes.

• Oportunismo

El oportunismo hunde sus raíces en una socialización extralaboral marcada por giros repentinos, shocks perceptibles, innovación permanente, inestabilidad crónica. Oportunista es aquel que tiene ante sí un flujo de posibilidades siempre intercambiables, que está disponible para el mayor número de ellas, que se pliega a la más próxima y luego se pasa con prontitud de la una a la otra. Esta es una definición estructural, sobria, no moralista del oportunismo. Se trata pues de una sensibilidad afilada para las cambiantes chances, una familiaridad con el caleidoscopio de las oportunidades, una íntima relación con lo posible en cuanto tal. En el modo de producción posfordista, el oportunismo adquiere un indudable relieve "técnico". Es la reacción cognitiva y de comportamiento de la multitud contemporánea al

hecho de que la praxis ya no está ordenada según directrices uniformes, sino que presenta un alto grado de indeterminación. Ahora bien, precisamente la capacidad de ingeniarse entre oportunidades abstractas e intercambiables constituye una "cualidad profesional" en algunos sectores de la producción posfordista: estos es, en aquellos ámbitos donde el proceso laboral no está regulado por un determinado objetivo particular, sino por una "clase de posibilidades" equivalentes, que se especifican a cada rato. La máquina informática, antes que medio para un fin unívoco, es premisa para sucesivas y "oportunistas" elaboraciones. El oportunismo se hace valor como recurso indispensable toda vez que el proceso concreto de trabajo es invadido por un difuso "obrar comunicativo", que por tanto no puede identificarse con el solo

y mudo "actuar instrumental". O también, toda vez que el trabajo incluye en sí los rasgos salientes de la acción política; en el fondo, ¿qué otra cosa puede ser el oportunismo si no una prerrogativa del hombre político?

• Cinismo

También el cinismo está conectado a la crónica inestabilidad de las formas de vida y de los juegos lingüísticos. Esta crónica inestabilidad pone ante nuestros ojos, tanto en el trabajo como en el tiempo libre, las claras "reglas" que estructuran artificialmente los ámbitos de acción. La situación emotiva de la multitud está caracterizada,



El pescador (1925)

tudismo respecto de las expectativas, contingencias de situaciones, identidades frágiles, valores en permanente mutación. Las tecnologías avanzadas no provocan un "desplazamiento", de manera tal de disipar una prematura "familiaridad", sino que reducen a "perfil profesional" la misma experiencia del extrañamiento más radical. El nihilismo, en un primer momento el lado oscuro de la potencia técnico-productiva, deviene luego un ingrediente fundamental y se convierte en un don que es considerado de gran importancia en el mercado de trabajo.

Éste es el trasfondo en el que se las arreglan dos tonalidades emotivas no propiamente edificantes: el

cabalmente, por la extrema vecindad de los "muchos", con las reglas que enervan cada uno de los contextos. En la base del cinismo contemporáneo está el hecho de que los hombres y las mujeres hacen, ante todo, experiencias de reglas mucho antes que de "hechos", y también antes que de eventos concretos. Pero hacer una experiencia directa de reglas significa también reconocer su convencionalismo y falta de fundamento. Así las cosas, no se puede estar más inmerso en un "juego" predefinido, participando con verdadera adhesión; pero se entrevé en cada "juego", despojado de toda obvedad y seriedad, sólo el lugar de la inmediata "afirmación de sí mismo". Afirmación de sí mismo tanto más brutal y arrogante, es decir, cínica, cuanto más se sirve —sin ilusiones pero con perfecta adhesión momentánea— de aquellas mismas reglas, de las cuales han sido percibidos el convencionalismo y la mutabilidad.

Pienso que allí hay una relación muy fuerte entre el *general intellect* y el cinismo contemporáneo. O mejor dicho: pienso que el cinismo es uno de los posibles modos de reaccionar ante el *general intellect* (no el único; pero aquí vuelve el tema de la ambivalencia de la situación emotiva). Pero veamos mejor este nexo. El *general intellect* es el saber social que se ha convertido en la principal fuerza productiva; es el conjunto de paradigmas epistémicos, de lenguajes artificiales, de constelaciones conceptuales que enervan la comunicación social y las formas de vida. El *general intellect* se distingue de las "abstracciones reales" típicas de la modernidad, que están todas ancladas en el "principio de equivalencia". "Abstracción real" es, ante todo, el dinero, que representa la commensurabilidad de los trabajos, de los productos, de los sujetos. Pues bien, el *general intellect* no tiene nada que ver con el principio de equivalencia. Los modelos del saber social no son unidad de medida, sino que constituyen el presupuesto

para posibilidades operativas heterogéneas. Los códigos y los paradigmas técnico-científicos se presentan como "fuerza productiva inmediata" o bien como "principios constructivos". No se equiparan con algo, sino que fungen de premisa para todo género de acción.

El hecho de que, para ordenar las relaciones sociales, se use el saber abstracto antes que el intercambio de equivalentes, se refleja en la figura contemporánea del "cínico". ¿Por qué? Porque el principio de equivalencia constituye la base, aunque contradictoria, para ideologías igualitarias que propugnaban el ideal de un reconocimiento recíproco y sin constricciones, así como el de una comunicación lingüística universal y transparente.

Por el contrario, el *general intellect*, en cuanto premisa apodictica de la praxis social, no ofrece ninguna unidad de medida para una equiparación. En el particular contexto en el que opera, el cínico reconoce el rol preeminente desempeñado por ciertas "premisas epistémicas" y la simultánea ausencia de reales "equivalencias". Comprime preventivamente la aspiración a una comunicación dialógica paritaria. Renuncia desde el principio a la búsqueda de un fundamento intersubjetivo para su praxis, como también a la reivindicación de un criterio compartido de evaluación moral. La caída del "principio de equivalencia", tan íntimamente vinculado al intercambio de las mercancías, en el comportamiento cínico se muestra como intolerante abandono de la instancia de "igualdad". A tal punto que él confía la afirmación de sí mismo a la multiplicación (y fluidificación) de jerarquías y ausencia de distribuciones que parece comportar la sobrevenida centralidad del saber en la producción.

Oportunismo y cinismo son, sin duda, "malos sentimientos". Sin embargo, es lícito considerar la hipótesis de que todo conflicto o protesta de la multitud se arra-



Sueño (1928)

gará en el mismo modo de ser (el "núcleo neutro" del que hablamos antes) que, por el momento, se manifiesta con estas modalidades un poco repugnantes. El núcleo neutro de la situación emotiva contemporánea, susceptible de opuestas manifestaciones, consiste en la familiaridad con el posible en cuanto posible, y en una extrema proximidad a las reglas convencionales que estructuran los diversos contextos de acción. Esta familiaridad y esta proximidad, de la que ahora derivan el oportunismo y el cinismo, constituyen, sea como fuere, una marca indeleble y distintiva de la multitud. □

* Trabajo Jorge Tula

Paradojas de un presente atormentado

Lula mandando en Pérez Companc

Que un sindicalista de base de los suburbios pobres e industriales de San Pablo, vuelto famoso durante las huelgas metalúrgicas que empezaron a derribar a la dictadura de los generales brasileños, muy probablemente pase en poco tiempo a tener poder de decisión sobre las estructuras de lo que fue el grupo privado insignia del capitalismo argentino, es sólo una de las tantas paradojas que pueblan nuestro atormentado presente.

Sebastián Etchemendy

En efecto, *Petrobras*, si bien con estructuras modernizadas y desligadas formalmente del poder político, y con parte de su capital en la Bolsa, sigue siendo una empresa estatal. Por lo tanto, no será ajena a las políticas que dispongan las próximas autoridades económicas de Brasil. En la época del capitalismo globalizado y del neoliberalismo que sacraliza la empresa privada, es nuevamente una empresa de origen estatal, como antes ocurrió con las españolas *Telefónica*, *Endesa* y *Repsol*, lo que irrumpe en el reino privado del mercado en la Argentina y termina con uno de los dos mayores grupos económicos nacionales.

El origen de esta paradoja está, obviamente, en las políticas liberalizadoras aplicadas en la Argentina durante la década del 90. En un contexto de fuerte apertura y apreciación cambiaria, si bien hubo algunos grupos y sectores industriales que se vieron beneficiados por la

vía de las privatizaciones o por regímenes tarifarios especiales, el modelo argentino careció de la más mínima estrategia industrial para potenciar sectores productivos y frenar la desnacionalización de la economía. Estas políticas estratégicas no sólo son habituales en los países desarrollados (se puede recordar, por ejemplo, el bloqueo del Congreso norteamericano a la compra, por parte de la *Deutsche Telecom*, de una de las principales empresas locales de telefonía móvil), sino también, en muchos países en desarrollo que hicieron reformas neoliberales. Este modelo no es uniforme: el neoliberalismo chileno conservó el cobre en manos del Estado como fuente de divisas. En México y Brasil, *Pemex* y *Petrobras*, los gigantes petroleros, fueron modernizados pero mantenidos como actores estatales poderosos. Ni qué decir de la versión neoliberal en España, donde se potenciaron grupos públicos como *Repsol*, *Endesa* y *Telefónica*. Estas empresas fueron constantemente protegidas en el

mercado doméstico y se privatizaron mediante diversos mecanismos (flotación de acciones en secuencias divididas en tramos institucionales y minoristas, "acción de oro", etcétera) directamente destinados a impedir que cualquier jugador mundial en el rubro se adueñara de ellas.

Como se sabe, en la Argentina primó la visión que atribuía todas las transacciones a simples "equilibrios de mercado". Incluso, ciertos sectores progresistas compartieron tácitamente esta visión del modelo único e inmutable, y poco importó pensar en políticas para conservar capacidad de decisión en el mercado local en el marco de la globalización, más allá de la utópica defensa de los "pequeños empresarios nacionales". Ciertamente, es difícil defender a grandes empresarios argentinos que siempre obtuvieron prebendas del Estado, y resulta patético ver cómo algunos de ellos sólo acaban por darse cuenta de la importancia de un Estado regulador cuando ven en riesgo sus insumos o sus contratos. Sin embargo, parece complicado pensarse como una Nación cuando los principales capitalistas y decisores económicos son extranjeros. Los argumentos económicos a favor de un empresariado nacional son abundantes y van desde las prioridades de reinversión de utilidades en el país hasta el desarrollo de negocios estratégicos y contratación de proveedores, que tienden a realizarse en el lugar donde está la base de un grupo multinacional.

Difícilmente pueda decirse que el petróleo bajo este suelo termina siendo español y brasileño debido a cuestiones puramente económicas o fiscales. Tres años después de comenzada la privatización, en 1993, el balance de *Repsol* mostraba utilidades por 961 millones de dólares. Tres años después de ser



Obreros (1933)

Continúa en pág. 24